

BOLETIN
CODEPU

Mayo/1988/Santiago/Chile/Circulación restringida.

Ferrovianos:



la huelga que
marcó el camino

A escasos meses del plebiscito fraudulento, nuestro país se encamina a importantes confrontaciones sociales y políticas. El conjunto de los movimientos sociales y amplias capas de nuestro pueblo se ponen en tensión y comienzan a desarrollar un proceso creciente de luchas por sus derechos.

El movimiento social despliega sus fuerzas alentado por la justeza de sus exigencias y por el carácter de sobrevida que tienen sus demandas. Los trabajadores ferroviarios y los múltiples conflictos laborales son demostrativos que el mundo sindical no está dormido y que por el contrario se está reactivando ruidosamente. La juventud universitaria y secundaria reinicia sus luchas encarando con firmeza a los rectores del régimen y defendiendo el derecho al estudio. Los pobladores recurren a silenciosas tomas de terrenos y se resisten a ser desalojados. En definitiva, se ha comenzado a andar.

A quienes hemos hecho de la defensa de los derechos humanos y populares nuestra bandera más preciada, estos signos de rebeldía son un estímulo, y nos obligan a acrecentar nuestro compromiso. Principalmente con los más postergados, los excluidos, las víctimas de la represión, que hoy ante el complejo escenario político observan con atención como en las alturas cupulares -entre todos los golpistas de ayer- se realizan maniobras diversas que amenazan con negociar y transar sus más sentidas reivindicaciones.

Nos asiste la convicción, que en la fuerza y decisión de los de abajo, en su creciente movilización, está la única posibilidad de alcanzar la anhelada libertad, la justicia y la democracia. La verdadera, la que Chile necesita.

Sumario

● Análisis Nacional	3
● La universidad movilizada	6
● Militares por la Democracia	7
● El verdadero "caos" económico	11
● Pobladores bajo la represión	13
● La construcción de la CUT	14
● El paro en FF.CC.	16
* Entrevista al Padre Eugenio Pizarro	19
* Panamá: Noriega sigue firme	24
* Noticias en fotos	28
* Periodistas en paro	30



Quemos la paz, pero ésta tiene el límite de la justicia y la verdad". Así sentenció en una emotiva y concurrida ceremonia un representante de los chilenos de origen palestino que colmaron la iglesia donde se realizó una misa en memoria de Abu Yihad, a la misma hora en que los restos del jefe militar de la OLP eran sepultados en el Medio Oriente. Por su parte

estudiantes palestinos agrupados en la Juventud Palestina Universitaria de la U de Chile señalaron en una declaración pública que "desde hace cuatro meses los palestinos llevan a cabo un verdadero levantamiento popular en demanda del retiro de las fuerzas de ocupación de sus territorios y por sus derechos inalienables de libertad, independencia y autodeterminación".

Al pueblo chileno no le resulta distante esta realidad, la de un pueblo oprimido y en lucha. También el nuestro ha recibido innumerables muestras de apoyo y solidaridad por su condición de pueblo agraviado.

Al pueblo palestino se le reconoce el derecho a rebelarse contra la opresión. Este reconocimiento internacional no ha sido gratuito, millares han tenido que sacrificarse para que su condición de pueblo en lucha se im-

ponga por sobre el provincialismo y pacatería de un pacifismo suicida y al final más costoso. Han sido largas décadas de combate contra el Estado sionista las que han demostrado ante la faz del mundo que se combate contra un Estado que hace del terrorismo una forma de gobierno. Y las víctimas no son sólo el pueblo ocupado, sino también los propios judíos que quisieran vivir en paz y en entendimiento con los árabes.

Las semejanzas con la realidad chilena no son pocas. El pueblo chileno también siente el agobio de una ocupación militar. El ejército invasor, sin embargo, habla nuestra propia lengua y saluda la misma bandera. Cuenta éste con un sector de la población que hace las veces de colaboradora. La lucha no se ha dejado esperar. Han sido muchos los que han conocido la feroz fuerza de la represión, recurso privilegiado de los regímenes de fuerza. Sin embargo se le niega a los chilenos el derecho de la lucha contra la opresión. Una pacatería trasnochada pretende deslegitimar y desnaturalizar el combate decidido. Como si los derechos del pueblo, humanos al fin, se mendigarán y no se conquistaran como la experiencia histórica así lo acredita.

CON LA DINAMICA DE LOS trabajadores

Del mes al año de los Trabajadores

Este año se celebra una vez más el primero de mayo. Pero esta vez el movimiento sindical entra en una fase significativa de acuerdos para que de una vez por todas quede constituida la Central Unitaria que agrupe a todos los trabajadores del país. Sin duda

que, de formalizarse, como todo lo indica, se estaría arribando a un momento histórico. Lo que aún se discute en la arena sindical es la forma que deberá adquirir esta nueva organización. Son cada día más poderosas las voces que exigen que la democracia y la combatividad sean los pilares de esta nueva central laboral. Es decir que se acabe con esta suerte de juego de cúpulas que por

todos estos años ha sido la tónica de las organizaciones de los trabajadores. La lucha de los ferroviarios apunta a ser un ejemplo vivo del verdadero sentido que iniciativas de esta trascendencia deben poseer.

Esta movilización marca la característica que la actividad del movimiento social está tomando en lo que va corrido del año. Es decir, estamos en un momento





que las iniciativas tienden a ser sectoriales y con pocos puntos de coordinación. En justicia hay que decir que en el caso de los ferroviarios, se está viviendo un proceso creciente de solidaridad. Pero en general las modalidades que en años pasados eran frecuentes, en el sentido de hacer confluir diversas dinámicas sociales, no es el rasgo predominante ahora. Así es como observamos que las importantes actividades que se han visto en el área de la educación no han contado con la irradiación que fuera deseable.

En todo caso el llamado que ha hecho la C.N.T. para llevar adelante una movilización el 11 de Mayo pudiera ser una prueba para articular un vasto movimiento social que anteciedera y determinara el cuadro político y social del plebiscito.

Régimen y Oposición: Silencios y Desencuentros

Más cuando en el seno del régimen han reaparecido síntomas de desencuentros en torno a las formas que debe asumir el evento mismo. Es lugar común asegurar que en este año, contrariamente a lo que se esperaba y daba por seguro, ha habido una pérdida de la iniciativa política de parte del régimen. En su interior han aflorado incoherencias. Los silencios desde el Ministerio del Interior son elocuentes.

Si a esto agregamos la división de Renovación Nacional se confirma el aserto de la debilidad de largo aliento tanto del régimen como de la derecha política.

Por su parte en el seno de la oposición de centro y derecha han surgido diferentes visiones de como concebir el No que postulan para el plebiscito.

Es de esta manera que Zaldívar ha adelantado su posición en el



sentido de no asignarle al No un carácter confrontacional. De esta forma, para esta oposición, es vital ser consecuentes con el Programa de gobierno que ha presentado y que en anteriores análisis hemos descrito como el intento de dar forma a un plan que interprete al empresariado y a las FFAA. Es decir la actitud actual es de tremenda importancia para mostrar una imagen de estabilidad y ofrecer garantías de que su postura no es la del caos.

Pero en el interior del pacto que se creó, llamado también grupo de los 13, se han perfilado posturas diversas respecto del sentido del No. Coexisten en esa agrupación, quienes sí le asignan un contenido de ruptura a la alternativa impuesta, y los otros que trabajan por que este grupo se planteen en un sentido de negociación y de continuidad, más que de ruptura. Digamos que no hay diferencias en cuanto a la por ellos necesaria negociación con las FF.AA. sino que la diferencia estriba en la condiciones en que debe negociarse. Por ello es que sectores de izquierda que están en el Grupo de los 13, sí se plantean como necesaria la movilización social para imprimir grados de derrota política a las FF.AA. Y en ese estado entrar a

negociar con ellas las condiciones de desarrollo político ulterior.

Para los sectores hegemónicos del centro y la derecha política opositora es difícil mantener en esa agrupación de partidos por el No una posición de equilibrio que no tire por la borda los planes de resolución de las pugnas interburguesas en el exclusivo marco de la institucionalidad establecida por el propio régimen.

Del acuerdo sin ruptura a la ruptura del acuerdo

Esto presenta una situación cuya evolución está por verse. La que podría establecer un nuevo polo de confrontación. Es decir, que para los que se plantean como eje central la lucha contra las condiciones fraudulentas en que se plantea el plebiscito podría presentarse un cuadro de acuerdo con los que plantean posiciones rupturistas dentro del plebiscito. De ser así se abrirán posibilidades más ciertas de encausar esfuerzos de lucha común y que efectivamente generen un potencial de fuerzas sociales mayores y en actividad.

Por otro lado en la izquierda se observa un fenómeno que se ha estimulado con el actual cuadro político y particularmente con el estado de las fuerzas populares. Nos referimos a los entendimientos que entre los socialistas se han venido estableciendo, los que pudieran llevar a los observadores más perspicaces a prever algún nivel de concertación orgánica. En años anteriores, cuando se celebraba el aniversario de la fundación del P.S. se veía como poco real el que se arribara a entendimientos más que formales entre fracciones socialistas, sin



Las movilizaciones populares aún aguardan respuestas consecuentes de las cúpulas políticas. Familiares de víctimas de la represión protestan frente a la moneda.

embargo el estado de reformulación de políticas de parte del P.S. Almeyda crea mejores condiciones para aventurar juicios en este sentido.

Generalmente en un contexto de alza de la lucha popular y cuando la alternativa popular de resolución de la crisis nacional es más poderosa, las diferencias inter-socialistas son incuestionablemente mayores. Porque de verdad que entre este sector político existen inocultables concepciones programáticas y estratégicas, distintas, acaso no antagónicas, las que quedan desnudamente expuestas en condiciones diferentes a las actuales. Sin embargo estas mismas diversidades hacen frágil el proyecto de reconstruir un P. Socialista

fuerte, más cuando este se configuraría a partir de directivas que han acumulado una experiencia de vida política propia en estos años, como también con militantes que han vivido en la base social las inconsecuencias de algunos socialistas que hoy se ubican más en el centro político que en la izquierda.

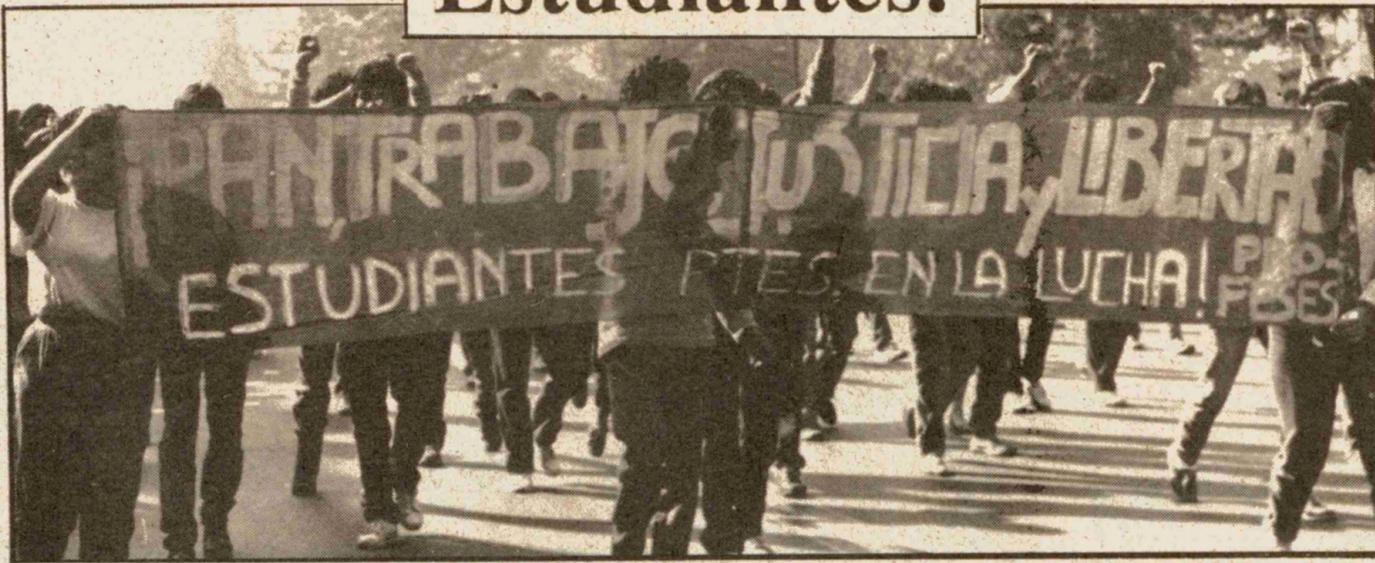
El orden de los trabajadores

En la arena política propiamente tal, vemos fenómenos complejos. Desde ya los escenarios políticos son posibles más que presentes. Esto lleva a am-

bigüedades y falta de posturas enfáticas y claras para plantearle al pueblo.

De aquí que estimamos que las dinámicas sociales que se podrían dar a partir de que la clase trabajadora podrían establecer ordenamientos distintos en los sectores políticos. El protagonismo que adquirirían los trabajadores asimismo podría, con toda seguridad, crear condiciones para extender social y geográficamente la lucha antidictatorial, de modo tal, que el plebiscito no sea el momento de definición de todo, como algunos creen, sino que la continuidad de la lucha apunte a definiciones más radicales en favor del pueblo y sus derechos, que los que el cuento dictatorial puede ofrecer.

Estudiantes:



LA UNIVERSIDAD MOVILIZADA

El año académico comenzó agitado en la mayoría de las universidades del país. En los diversos planteles, las organizaciones estudiantiles y de docentes han levantado reivindicaciones que apuntan a resistir los intentos del sistema por destruir la educación superior del país, y crear en cambio corporaciones funcionales a los objetivos del modelo político y económico instaurado a

partir de 1973. El proceso destructor, que marchó casi sin cortapisas durante los primeros años, ha encontrado más adelante obstáculos crecientes, materializados en la resuelta actitud de las comunidades de docentes, funcionarios y estudiantes.

De este modo, los servidores de la dictadura puestos en las rectorías de las universidades han topado con problemas que muchas veces, les

han significado tener sencillamente que desistir de sus planes o modificarlos sustancialmente. Aunque las más de las veces, se ha tratado de meros cambios de táctica, para persistir en los intentos de demolición, como ocurre actualmente en la Universidad de Chile, donde se ha definido al rector Juan de Dios Vial Larraín como una versión más solapada de José Luis Federici, puesto que sus planes son muy semejantes



a los del repudiado ex rector.

Académicos: en defensa de la universidad

La Universidad de Chile continúa siendo, en muchos sentidos, el centro de la lucha. Los académicos y funcionarios han reaccionado en forma organizada a los planes de Vial Larraín, que son los mismos de Pinochet, para reducir la universidad a una mínima expresión y regalar sus funciones esenciales al sector privado, para transformarlas en nuevos y rentables negocios, además de alejar cada vez más a los sectores populares de la posibilidad de alcanzar una educación superior. Por el momento, la situación se mantiene en statu quo y Vial se vio obligado a dialogar con los académicos y decanos, tratando de ganar tiempo y evitar un paro de actividades que ya había sido convocado.

Estudiantes: firmes en la pelea

Los estudiantes universitarios han estado en todo momento junto a profesores y funcionarios, en el entendido de que la etapa actual no es sino una prolongación de la lucha que la comunidad de la Universidad de Chile dió contra Federici. A lo anterior, se sumó la lucha por las reivindicaciones propias del movimiento estudiantil. Esta lucha se centró en los cobros abusivos que la Universidad de Chile, y también las restantes en el país, comenzaron a aplicar a los alumnos. En este punto, el rector Vial Larraín también evitó a última hora un paro de actividades, cuando anuló una disposición que obligaba a los estudiantes a firmar un pagaré usurario en el momento de matricularse.

La lucha contra los cobros abusivos ha sido un factor común de movilización de los estudiantes de todas las universidades. En la Universidad Católica, el ex pe-

dagógico y otros planteles, las autoridades pretendieron exigir avales a los estudiantes a fin de asegurarse los pagos, lo que también ha dado lugar a nutridas manifestaciones de repudio. En la Universidad Católica, el propio Cardenal Fresno fue encarado públicamente por los estudiantes y obligado a emitir un pronunciamiento público respecto del carácter no mercantilista que debería tener una institución católica. En el ex pedagógico, el rector nazi Herrera Cajas debió ceder y retirar la exigencia de avales. Algo similar ocurrió en la Universidad Católica de Valparaíso.

También en regiones

En las universidades de provincia la situación es similar. En La Serena, el despido de 22 docentes motivó la inmediata respuesta de los académicos, que por unanimidad aprobaron la realización de un paro en apoyo a los despedidos. En Temuco, la Universidad Católica fue ocupada por los estudiantes y en Talcahuano, el rector de la UC, Juan de Dios Vial Correa, no pudo realizar una clase magistral ante el repudio generalizado de parte de los alumnos.

La situación más agitada se vive en la Universidad de Concepción, luego que el rector Carlos von Plessing expulsó a siete estudiantes, tres de ellos dirigentes de la Federación, en venganza por un público abucheo de que fue objeto por parte de la comunidad estudiantil. Simulando ser la víctima de un hecho que tuvo todas las características de una provocación, Von Plessing se lanzó en picada contra el movimiento estudiantil, tratando de destruirlo. La respuesta, al cierre de esta edición, era un paro generalizado de estudiantes y académicos.

*José Muñoz Salas,
Capitán de
Carabineros (R):*

**POR EL
RESCATE DE
NUESTRAS
FUERZAS
ARMADAS**

Creada en octubre de 1984 con la "Declaración de Buenos Aires", la Organización de Militares por la Democracia, la Integración y la Liberación de América Latina y el Caribe (OMIDELAC) agrupa a miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro continente que están de acuerdo en "institucionalizar el aporte de este sector de la sociedad al esfuerzo colectivo del pueblo latinoamericano que lucha por su independencia y desarrollo integral."

"Nosotros, latinoamericanos optamos por la profesión militar como forma de servir a nuestros pueblos -dice su declaración de principios- inspirados en los ideales de nuestros próceres de la primera independencia, planteamos la necesidad de continuar la obra inconclusa de la liberación de toda forma de dependencia externa y de dominación interna".

"Vemos -agregan- que por encima del interés nacional, la injusta división internacional del trabajo nos ha situado en la condición de países productores de materias primas, situación que ha profundizado la dependencia generada por los imperialismos, de los cuales el que más nos afecta en la

actualidad es el de Estados Unidos de Norteamérica”.

Más adelante, la declaración de principios agrega que dentro del marco de dominación, el sistema interamericano y las relaciones militares que genera han sido una de las herramientas a través de cuyos componentes no sólo se ha deformado el significado de los términos patria, soberanía, desarrollo y seguridad, sino que se ha desvirtuado la auténtica misión de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, cuya virtud fundamental debe ser la de subordinar su acción a la voluntad soberana de sus pueblos”.

“Hoy -dicen- ciertas cúpulas de mando asociadas a las oligarquías nativas, han transformado a las Fuerzas Armadas de gran parte de nuestra América en elementos retardatarios de la definitiva independencia, en brazos armados de los sectores dominantes y en algunos casos, en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propios países”.

El presidente de OMIDELAC, el general peruano Edgardo Mercado Jarrín, está secundado por una secretaría ejecutiva con integrantes de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, Uruguay y Venezuela.

El representante en Chile es el capitán de Carabineros y ex jefe de la guardia presidencial de Allende hasta el 11 de septiembre de 1983, José Muñoz Salas. Para él, es fundamental que la civilidad luche por el rescate de sus Fuerzas Armadas y de orden, por ser éstas instituciones permanentes, que en el futuro democrático deberán estar al servicio del pueblo.

-¿Es “lo militar” privativo de las Fuerzas Armadas?

-Lo así llamado “militar” tiene dos componentes, el llamado



político-social y el factor técnico-profesional. Yo pienso que los sectores democráticos del país deben desarrollar no sólo una concepción de las Fuerzas Armadas como institución, es decir la determinación de su rol, misión y función, sino también una política de defensa, que no puede ni debe generarse sólo en los cuarteles, sino que debe provenir del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el problema militar es un asunto que compete a los depositarios de la soberanía nacional, a los ciudadanos.

-¿También en lo que se refiere a una guerra, por ejemplo?

-Si, porque la definición de los problemas principales de una posible contienda no son cuestiones derivadas de una concepción técnico-profesional sino política, por

lo tanto competen vitalmente a la nación y comprometen a todo su pueblo. Debe existir, por decirlo así, una conducción ciudadana de la política militar.

-¿Alguna vez en la historia las Fuerzas Armadas han tenido más relación con los intereses ciudadanos?

-La creación de las Fuerzas Armadas chilenas se desarrolló al calor de las gestas independentistas, con un ideario patriótico y de fusión con los más altos valores libertarios. Entonces su rol sí fue progresista y representativo de los intereses populares y con una concepción de integración y colaboración con los demás países de América Latina.

Fué más tarde que las doctrinas militares fueron orientadas por los sectores políticos dominantes, y a

partir de la segunda guerra mundial, las doctrinas de defensa a nivel regional comenzaron a ser elaborada en el Pentágono norteamericano, para ser aplicadas en nuestro continente. Y creó instancias como pactos, tratados, intercambio de oficiales, becas, ayuda militar, conferencias, el Sistema Interamericano de Defensa, la Junta Interamericana de defensa, la hipótesis de conflictos sugeridos, la Doctrina de Seguridad Nacional, etc., para asegurar su dominación sobre los ejércitos y los países latinoamericanos.

-¿Qué posibilidades de cambio ve a esta situación?

-Considero que eso está íntimamente ligado a los logros democráticos que sea posible conquistar. Esto, porque sólo el conjunto de los sectores democráticos podrán tener la fuerza suficiente, tanto política como social, para elaborar una nueva Doctrina Nacional de Defensa que represente, no los intereses de un sector de la sociedad, ni esté determinado por influencias extranjeras, sino que se trate de una auténtica doctrina militar democrática que interprete los anhelos e intereses de las grandes mayorías ciudadanas, el interés nacional y la integración regional.

-¿Es monolítica la cohesión de las Fuerzas Armadas chilenas en estos momentos?

Estos 14 años de imposición de un proyecto político-económico ajeno a los intereses mayoritarios, han afectado profundamente el aspecto doctrinario de las FF.AA. y de orden.

La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, indudablemente ha entrado en conflicto con las raíces históricas y tradicionales de las instituciones, cimentadas por tantas generaciones de uniformados que aportaron un pensamiento democrático, como los que sustentaron los Generales Schneider, Prats, Bachelet.

Por lo tanto, la cohesión de las FF.AA. y de orden, no está dada en su conjunto, por el acatamiento irrestricto de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta ideologización, que algunos denominan el político de uniforme, se da sólo en algunos sectores, no en su conjunto.

La opinión pública ha sido informada de algunos nombres de uniformados que podrían estar involucrados en violaciones a los Derechos Humanos que vuelven a repetirse, como también las actividades políticas desarrolladas por un sector del Ejército de reconocido compromiso, de minoría no significativa.

Creemos que las FF.AA. y de Orden no son impermeables al acontecer político-nacional, que existen sectores importantes y posibles de ganar para un futuro democrático, siempre y cuando, exista una alternativa clara, que refleje el conocimiento de la realidad militar y ofrezca en definitiva una salida seria, responsable, que privilegie los intereses supremos de la Nación por sobre intereses político-partidistas.

Debe expresarse claramente la voluntad política de todos los partidos políticos democráticos que luchan por la recuperación de la democracia, en el compromiso unitario por Chile y su pueblo en la búsqueda de las coincidencias generales, que posibiliten el frente más amplio y la expresión incuestionable de una mayoría importante que exige el restablecimiento de su soberanía, su voluntad y protagonismo, en la construcción participativa de su propio destino, en paz, progreso y justicia social.

-¿Qué propone OMIDELAC para Chile?

-Son tareas preferentes de nuestra organización nacional, ahora: el término del exilio y la lucha por el retorno de todos los ex uniformados; la defensa irrestricta de los derechos humanos y el compromiso ético y moral de los mili-

tares, adscrito en un Estatuto del Uniformado Democrático; la realización de juicios individuales a los responsables por violaciones a los derechos humanos, realizados por tribunales ordinarios de justicia. La defensa de las empresas estatales como empresas estratégicas y los recursos naturales, como fundamento de la seguridad nacional; la reforma al Código de Justicia Militar y atribuciones de los Tribunales Militares; las reivindicaciones morales, legales y económicas por medidas ilegales, inconstitucionales y arbitrarias que afectaron a ex uniformados durante el golpe militar.

También consideramos una necesidad el cambio en los planes de estudio de las Escuelas Matrices en los aspectos académicos que correspondan, los que deberán estar de acuerdo a las normas generales de la educación universitaria nacional y el derecho a la libre postulación, por concurso público, de profesores en los institutos uniformados.

Proponemos el término de los servicios de inteligencia e información, por ser organismos de represión contra sus conciudadanos, ajenos a los servicios propios de las instituciones uniformadas; y proponemos determinar el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden en el futuro marco democrático, considerando las concepciones modernas de la defensa nacional y la realidad internacional, como también su integración y participación en el desarrollo nacional.

Creemos que es necesario y posible conformar una comisión de integración entre las direcciones políticas democráticas y ex uniformados o en retiro democráticos, para el estudio, análisis y propuestas de consenso para presentar a nuestro pueblo una auténtica política militar democrática para el mañana libertario.

INTERVENCIONES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN AMERICA LATINA

Fuente: Documento de U.A.L.A.

FECHA	LUGAR	ACCION	ARGUMENTO/OBJET.
1831-Diciembre	MALVINAS	Expedic. Frag. Lexington	Ocupación de las islas
1848	MEXICO	Ocupación de territorios	Anexión
1854	NICARAGUA	Apoyo a filibusteros	Ocupación de W. Walker
1858	PARAGUAY	Intimidación naval	"Defensa del comercio libre"
1886-Mayo	NICARAGUA	Desembarco de marines	Pleitos políticos internos
1898-Abril	CUBA	Bloqueo Naval	Disputa con España
1898-Julio	CUBA	Desembarco de marines	Disputa con España
1898-Julio	PUERTO RICO	Desembarco de marines	Disputa con España
1899-Febrero	NICARAGUA	Desembarco de marines	Control del orden interno
1901-Noviembre	PANAMA (Col.)	Desembarco de marines	Protección del tránsito y disturbios internos
1902-Abril	PANAMA (Col.)	Desembarco de marines	Custodia
1903-Marzo	HONDURAS	Ocupac. de Pto. Cortés	Revolución popular
1903-Marzo	REPUBLICA DOMINICANA	Desembarco de marines	Revoluciones internas
1904-Enero	REPUBLICA DOMINICANA	Desembarco y ocupación	Protección de intereses
1904-Noviembre	PANAMA	Desembarco de marines	Prevención de revoluciones (Separación de Colombia)
1905-Marzo	HONDURAS	Desembarco de marines	Revolución interna
1906-Septiembre	CUBA	Desembarco de marines	Sostenimiento del régimen
1907-Marzo	HONDURAS	Desembarco de marines	Control de la zona
1908-Diciembre	VENEZUELA	Acorazados en La Guaira	Presión política
1909-October	NICARAGUA	Envío de una flota naval	Destitución de Zelaya
1910-Febrero	NICARAGUA	Desembarco de marines	Cambio de presidente
1911-Enero	NICARAGUA	Desembarco de marines	Obtención de información
1912-Marzo	HONDURAS	Desembarco de marines	Protección de línea ferro.
1912-Agosto	NICARAGUA	Desembarco y cañoneo	Revolución nacionalista
1913-Febrero	MEXICO	Flota naval en Veracruz	
1914-Enero	HAITI	Desembarco de marines	Control de disturbios
1914-Abril	MEXICO	Envío de 65 mil soldados	Cañoneo y ocupación de Veracruz. Derrocamiento de Huerta
1914-Julio	REPUBLICA DOMINICANA	Cañoneo y desembarco	Control de luchas internas
1915-Julio	HAITI	Invasión por tierra de 12.000 soldados	Persecución de P. Villa
1916-Marzo	MEXICO		
1916-Noviembre	REPUBLICA DOMINICANA	Desembarco y ocupación	Control militar del país
1918-Junio	PANAMA	Desembarco de marines	Represión de disturbios
1919-Septiembre	HONDURAS	Ocupación de puertos	Control de elecciones
1920-Abril	GUATEMALA	Desembarco de marines	Protección de bienes USA
1921-Abril	PANAMA	Desembarco de marines	Ocupación de La Chorrera
1924-Febrero	HONDURAS	Ocupación de la capital	Puja entre Cias. bananeras
1925-October	PANAMA	Desembarcan 600 marines	Represión de huelga
1926-Diciembre	NICARAGUA	Desembarco en Bluefields	Desarme de rebeldes
1927-Julio	NICARAGUA	Bombardeo de Ocotal	Persecución de Sandino
1929	HONDURAS	Bombardeo por error	Lucha contra Sandino
1933	CUBA	Bloqueo Naval	Prevención de disturbios
1937	PUERTO RICO	Combate y represión	Revolución nacionalista
1954	GUATEMALA	Ametrallan y bombardean	Derrocamiento de Arbenz
1955-Septiembre	ARGENTINA	Transmisiones portaav. Midway	Derrocamiento de Perón
1959-Marzo	CUBA	Incendio de plantaciones	Sabotaje y desestabil.
1961-Abril	CUBA	Invasión de Playa Girón	Derrocar a Castro
1964	BRASIL	Envío de buques	Derrocamiento de Goulart
1965-Abril	REPUBLICA DOMINICANA	Invasión por 40.000 sold.	Derrocamiento de revol. nacionalista
1973	CHILE	Desestabil. y conspir.	Derrocamiento de Allende
1980	EL SALVADOR	Envío de asesores milit.	Combate a insurgencia
1981	HONDURAS-NICARAGUA	Creación de fuerz. mercen.	Desestabil. del sandinismo
1982	HONDURAS	Maniob. bélica. Construc. de bases y aeropuertos	Cerco a Nicaragua
1982-Junio	ARGENTINA	Apoyo logíst. a Inglaterra	Guerra de Malvinas
1983-October	GRANADA	Invasión con tropas espec.	Derrocamiento de Bishop
1983	NICARAGUA	Minado de puertos	Combate al sandinismo
1984	EL SALVADOR	Envío de asesores	Combate a insurgencia
1984	HONDURAS	Maniob. terrest. y aeronav.	Preparativos para una invasión a Nicaragua
1985	NICARAGUA	Vuelo de aviones espías	Reconocimiento militar
1986-Agosto	BOLIVIA	Envío de unidad de fuerzas especiales	Búsqueda de narcotraf.

La dictadura, en su majadera propaganda, utiliza mucho la mención del año 1973 como símbolo de caos, desquiciamiento y de guerra civil, por una parte para justificar la sangrienta arremetida contra el pueblo chileno iniciada el 11 de septiembre de ese año, y por otra, para resaltar los supuestos logros obtenidos en materia económica en los 14 años que lleva usufructuando del poder.

En lo económico, se dice con insistencia que en 1973 la industria "estaba destruída", "los campos arrasados" y no había nada

PARA MENTIR Y COMER PESCADO

trega reveladores antecedentes, analizados en fecha reciente por el economista Gonzalo Martner, quien fué ministro director de ODEPLAN durante el Gobierno de la Unidad Popular. Martner hace una esclarecedora comparación de algunos indicadores entre los años 1973, 1975 y 1982, en los cuales se vivieron situaciones de crisis.

¿Cual caos?

De acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, en 1973, "el año del caos", el producto

Las propias estadísticas de la dictadura demuestran que ahora los chilenos somos más pobres que durante el gobierno popular.



que comer. La repetición monótona de estas consignas huecas no deja de tener su efecto y no falta quienes caen en el garlito de terminar creyendo que lo que se dice es cierto, desembocando en una justificación tácita del régimen que en forma sistemática se ha dedicado todos estos años a superexplotar a los chilenos, llevándolos a un nivel de pobreza comparable sólo con lo que ocurría hace 50 años o más.

Por la boca muere el pez

Al igual que en Alemania, cuando los criminales nazis quedaron al descubierto en toda su magnitud con la lectura de sus propios archivos, nada mejor que recurrir a las propias estadísticas y cifras de la dictadura para descubrir sus mentiras. Un texto publicado por el Banco Central, llamado "Indicadores económicos y sociales 1960-1985" en-

geográfico bruto cayó ese año en un 5,6% en 1975, con Chile bajo la dictadura, el producto cayó en un 12,9% y en 1982, la caída llegó al 14,1%. Cuando Pinochet habla entonces del peligro de volver a 1973, los resultados económicos de su régimen invitan al regreso.

En cuanto al producto per cápita, basado en moneda de 1976, en 1973 fue de 1.098 dólares. En 1975 bajó a 933

dólares, y en 1982 llegaba a 1.078 dólares. O sea, que en pleno caos, los ingresos de los chilenos fueron superiores a los que tuvieron en las dos crisis vividas durante la dictadura.

El sector minero, que en 1973 estaba afectado por agudos problemas de reorganización administrativos, tras la nacionalización del cobre realizada en 1971, tuvo una baja de 3,8% en su producción. El porcentaje representa sólo un tercio de la caída que tuvo la producción minera en 1975, que fue del 11,3%. En 1982, hubo un crecimiento del 5,7%.

¿Qué pasó en el sector agrícola, que según el régimen fue el más afectado por el caos? Es efectivo que en el campo se vivía una situación anormal. A la actitud sediciosa de los latifundistas y empresarios, embarcados en una campaña terrorista para derrocar al gobierno popular, respondían las masas campesinas organizándose y ocupando los fundos para mantener la producción. Esta bajó ese año en un 10,3%, porcentaje significativo pero no caótico ni irreversible, como sostiene la dictadura. En 1975 la producción agrícola creció en un 4,8% y en 1982 volvió a caer, en un 2,1%.

En el sector industrial, cuando la SOFOFA y demás organizaciones patronales saboteaban las fábricas y conspiraban contra el Gobierno Constitucional, la producción manufacturera cayó un 7,7%, equivalente a menos de un tercio de la debacle de 1975, cuando la caída fue de un 25,5%. En 1982 la caída industrial fue del 21%, de acuerdo siempre a las cifras dadas a conocer por el Banco Central. En cuanto al empleo industrial, la cesantía en 1973 era de 2,4%. En 1975 la cifra subió al 13,6% y al 26,6% en 1982.

En la construcción el panorama es similar. En 1973, "año del caos", cayó un 11%. La baja trepó

al 26% en 1975 y era del 23,8% en 1982, luego de la pasada de los "Chicago Boys" por la economía chilena. En cuanto a los cesantes de la construcción, eran un 6% en 1973, un 28,9% en 1975 y nada menos que un 50,3% en 1982. Record Mundial. Cabe señalar que en 1987, la construcción fue el sector de la economía que más creció: un 10,6%. En el mismo período, los salarios de sus trabajadores fueron también los que más cayeron: un 3,5%. Lo que significa que todo el crecimiento se tradujo sólo en utilidades para los empresarios del sector.

En el transporte, sector en que los camioneros encabezaron los paros subversivos contra el Gobierno Popular, y en el comercio, las cifras son similares al compararse los resultados de 1973, 1975 y 1982.

Empleo

Uno de los indicadores que más dramáticamente reflejan los efectos de la política económica de la dictadura es el empleo. Durante el "caos" de 1973, la desocupación total en el país era del 3,3%. Dos años después, en 1975, la tasa oficial era del 24,9%, aun cuando algunos especialistas han demostrado que en ese entonces se produjo una grave distorsión en las estadísticas del INE. En 1982 la tasa de desempleo oficial era del 19,6%, sin contar al PEM y al POJH. Con los adscritos a estos programas, los cesantes eran más del 25% de la fuerza laboral. Ocho veces más que en 1973. Aún hoy, cuando los apolo-gistas y funcionarios del régimen pregonan que Chile está "en el umbral del desarrollo", la tasa oficial de desempleo triplica la existente en 1973.

Causas de la crisis

La crisis de 1973, como se

sabe, fue el resultado de la dinámica que los hechos políticos dieron a la lucha de clases. Los sectores proletarios y populares, con el aval de un Gobierno Popular, disputaron a las clases dominantes el control de ciertos sectores de la economía, a lo que los patronos respondieron con sabotaje, conspiración y terrorismo. La situación, obviamente, afectó la normalidad del quehacer económico y el país en su conjunto se vio afectado, aunque, como lo demuestran las cifras del banco central, en mucho menor medida que en las crisis posteriores, de 1975 y 1982.

¿Por qué se producen las dos últimas crisis, cuando los sectores patronales dominaban sin contrapeso la economía, imponiendo a sangre y fuego un modelo represivo, de super explotación, quitando, por la fuerza del terror estatal, toda capacidad de resistencia a los sectores asalariados?

Para Gonzalo Martner, se originaron en factores internos, generados por una política económica errónea. Los autoproclamados "milagros económicos" de la dictadura no son más que períodos de recuperación de estas crisis. Las cifras del banco central, para el ex ministro de la Unidad Popular, demuestran que las políticas de la dictadura han fracasado rotundamente en sus objetivos principales, que son hacer más dinámico el crecimiento de la producción "per cápita" y del consumo por habitante, y mantener un crecimiento estable y sostenido de la economía en su conjunto.

POBLADORES

bajo la bota represiva



La represión no ha logrado frenar a los pobladores en su búsqueda de justicia. El Campamento "Padres Salesianos" de La Florida es ejemplo vivo del poder de la movilización.

Mientras las cúpulas políticas dan vueltas alrededor del plebiscito, se desata una represión salvaje y dirigida contra el movimiento poblacional, una represión que las publicaciones y radio emisoras de la oposición electoralista desconocen y no quieren que nosotros conozcamos.

Las características de esta ola anti-popular son varias: primero, las fuerzas represivas siempre actúan como si estuvieran buscando a criminales, autores de actos de violencia popular (si estos actos son políticamente justificables en la coyuntura actual no es nuestro tema), lo que sirve como una justificación para dirigirse contra organizaciones sociales. Segundo, las fuerzas represivas, sean carabineros, detectives o civiles, saben no solamente a quienes buscan y en general donde viven sino andan equipados con fotos y listas de nombres de personas activas en las organizaciones del sector además de con metralletas. Tercero, los allanamientos son selectivos, casi nunca van puerta a puerta. Cuarto, ya que saben donde ubicar a casi todo el mundo, vuelven en repetidas ocasiones a interrogar y hasta a llevar a ciertas personas. Finalmente, los detenidos frecuentemente son torturados y llevados a recintos secretos, aunque muchas veces son rápidamente dejados en libertad, lo que no indica buena voluntad por parte de la CNI, sino un aumento siniestro de eficiencia. El hecho que estos datos no han salido en los medios oposi-

tores electoralistas indica que en su afán hegemónico, los sectores del centro político quieren negar la existencia de la lucha social poblacional y pintarse como los únicos con un proyecto anti-dictatorial.

Un pretexto para reprimir

Los allanamientos despegaron después del asalto a la escuela Japón, llegando a tal punto que el departamento jurídico de CODEPU se vio obligado a presentar un recurso de protección en favor de todos los habitantes de las poblaciones San Joaquín, La Victoria, Balmaceda y Villa Sur. Un caso típico es el de Luis Enrique Abarca Díaz. El 1º de marzo dos vehículos de investigaciones llegaron a su domicilio; lo allanaron y se fueron. Dos horas más tarde catorce civiles y tres carabineros volvieron y lo detuvieron, golpeándolo y amenazándolo de muerte. Aunque fué liberado al día siguiente, tres días más tarde detectives lo detuvieron nuevamente, torturándolo con corriente además de pegarle. Lo soltaron 24 horas después pero tres días más los tiras lo llevaron nuevamente, liberándolo el próximo día. En total 36 personas del sector sufrieron este tipo de hostigamiento; de ellos 4 quedan detenidos todavía: Domingo Faustino Sarmiento Flores, Miguel Herrera Martínez, Samuel Robles Reinoso y Miriam Araos Gárnica, quien tiene dos meses de embarazo. No obstante, no están acusados de partici-

par en el asalto, sino de violar la ley de control de armas.

El asesinato de un carabiniere en el paradero 5 de Vicuña Mackenna, el 2 de abril, fue seguido por una represión calculada contra las poblaciones El Pinar y Germán Riesco. Tres dirigentes sociales de El Pinar, todos activos en comunidades cristianas, Roberto Jeria Salinas, Roberto Morales Pinochet y Jaime Fuentes Núñez fueron detenidos entre otros, el primero con su hermano y hermana. Los últimos dos fueron llevados por civiles a un recinto secreto donde les aplicaron corriente. A todos les hicieron preguntas sobre personas y organizaciones sociales de la población. El 14 de abril siete personas incluyendo dos así llamados "patos malos" de la población Germán Riesco fueron acusados de asesinato. Gente del sector no niega que son marihuaneros pero dudan que sean los responsables ya que el mismo día del asesinato caminaron libremente por la población como si no tuvieran nada a esconder.

En todo caso, en esta época de cesantía y apretón económico la distinción entre "delincuente" y "trabajador honesto" ha llegado a perder casi todo su valor analítico. Nadie duda que la sociedad capitalista produce ladrones (los pobres van a la cárcel, los ricos roban desde el FMI) y que los ladrones pobres roban a otros pobres pero el verlos como una casta perdida es aceptar una división artificial del pueblo que la ideología burguesa quiere imponer.

También en Renca

Un cuadro semejante se ha presentado en Renca después del asesinato de otro carabiniere el 12 de abril. Las fuerzas represivas han allanado una serie de casas de dirigentes sociales, especialmente de trabajadores del equipo de salud de la fundación "Missio" en las poblaciones Infante, Huamachuco 2 e Hirmas 2. Pobladores hablan de una vigilancia constante en el sector por parte de civiles. Nuevamente estos hechos y la detención de por lo menos 5 pobladores no han aparecido en la prensa opositora electoralista. En cambio, dos dirigentes políticos, Patricio Aylwin de la DC y José Tomas Saéiz de los Humanistas, asistieron a los funerales del carabiniere, lo que fue ampliamente publicitado. La postura anti-violencia de Saéiz y Aylwin sería más creíble si tuvieran la costumbre de demostrar tanto duelo público cada vez que la violencia del régimen cobra otra vida desde los sectores populares.

Todos estamos de acuerdo en que la Central Unitaria de Trabajadores es la herramienta fundamental para la activación de la sindicalización de los trabajadores de nuestro país y de la recuperación histórica de participación de la clase obrera y empleados en la organización clasista. Esta afirmación la hace un grupo de dirigentes revolucionarios que trabajan activamente en el proceso de creación de esa central unitaria que deberá ver la luz dentro de cien días. La primera fecha fijada para ello es el 12 y 13 de agosto próximos, aunque podría alargarse hasta los primeros días de septiembre, tratando de encontrar una fecha que recuerde el principio de un período de auge de las actividades sindicales, sociales y políticas, esto es el 4 de septiembre.

La designación de la fecha pareciera ser algo casi sin importancia, tomando sólo en consideración que ella sea lo antes posible. Pero no es así. La fecha se ha convertido en algo de profunda discusión ya que el momento del nacimiento de la Central deberá decidir también su posición frente al momento político que vivirá el país, esto es, frente al plebiscito y frente a las distintas posiciones que las diferentes corrientes de opinión de la oposición tienen ante él. Y en el plano sindical esto cobra mayor importancia, siendo este, uno de los puntos de reunión de toda la oposición. Esto explica las largas y a veces hasta asperas, discusiones que la dirigencia sindical sostiene. Unos pretenden que la creación de la Central sea lo más rápido porque hay que integrarla a la brevedad a la lucha por el NO. Otros también quieren que sea rápida, pero pensando sólo en ella como un factor de convocatoria y de movilización social. Por último, hay otros que quieren dejar pasar el plebiscito y no involucrarla en determinadas posiciones políticas.

Estas y otras discusiones quedaron saldadas por decisión mayoritaria en la última reunión del CONFASIN -Consejo de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y Sindicatos Nacionales- que decidió que la formación de la Central Unitaria de Trabajadores era de la mayor urgencia. "Al margen de su participación o no en el gran debate por el plebiscito, la Central, -nos dicen los dirigentes entrevistados-, es un instrumento de lucha superior que "robustece el papel de nuestra clase en la lucha contra la dictadura y el fortalecimiento de una alternativa auténticamente popular".

"Esta Central será expresión de la unidad que

EL RENACER DE LA CUT



Dirigentes Sindicales. La CUT ¿en la cúpula o con las bases? Moisés Labraña (C.N.T.); Sergio Troncoso (construcción); Federico Mujica (CEPCH).

pueda alcanzar hoy el movimiento sindical, en el proceso por alcanzar una organización única que agrupe al conjunto nuestra clase. Será la superación de todos los proyectos unitarios de los trabajadores que se han dado bajo dictadura, caracterizados por ser concertaciones cupulares político-sindicales. En la Central deberán fundirse todas las organizaciones sindicales y los referentes político-sindicales”.

En lo que sí todos están de acuerdo es en que la organización debe ser además de unitaria, pluralista y democrática. También que ella debe contener un proyecto de transformación global de la sociedad. Esto último, tiene sus matices de diferencia, ya que se tratara de saber lo que se construirá como sociedad después de la dictadura. Y allí las discusiones se centran en torno a la “lucha de clases” y al germen socialista que debe marcar el accionar de la central. El “impasse”, hasta el momento, se ha dirimido eludiendo los términos polémicos y dejando la discusión no sólo para más adelante, sino también para que en ella participe la base en su totalidad.

El trabajo que la CUT plantea es enorme. Se trata por lo menos, de hacer volver el movimiento sindical al momento en que la dictadura intentó hacerlo desaparecer, tratando de convertirlo sólo en un mediador atomizado de la oferta de fuerza de trabajo y despojarlo de toda connotación política, o mejor dicho, de toda participación en el desarrollo de políticas nacionales, es decir, sólo identificarlo con la obtención de condiciones materiales y micro-sociales de trabajo en el lugar de ejecución de las tareas productivas o de servicio. La dictadura no solo intentó descabezar el movimiento sindical negándole las oportunidades que hasta el 73 había tenido de intervenir en la toma de decisiones sociales, económicas y políticas, sino que estaba obligada a encuadrar al

sindicalismo chileno a lo que eran las transformaciones económico-estructurales y del sistema político y convertirlo en un movimiento sin capacidad de lucha.

La primera tarea es recuperar esa capacidad de quitar el miedo a aquellos trabajadores que no quieren sindicalizarse por temor a la represión del régimen, devolver la dignidad de trabajadores. Hay que superar en el más breve plazo la denigrante cifra de sólo 9% de trabajadores sindicalizados. “La pelea es grande, dicen los dirigentes, ya que vivimos con salarios de hambre, el desempleo es terrible y las leyes laborales nos perjudican. Todo esto también va contra el sindicalismo y el pueblo en general, y los únicos capaces de cambiar esta situación somos los trabajadores y la movilización social”.

1º de Mayo

La conmemoración de esta fecha de los trabajadores estuvo enmarcada dentro de un programa de movilización.

El acto realizado en el Paradero 1 de la Gran Avenida sirvió para preparar la huelga nacional que a partir del 11 realizarán todos los trabajadores chilenos.

La huelga, decidida en el mes pasado, tiene como motivo el silencio de la dictadura ante las peticiones entregadas por el Comando Nacional de Trabajadores a Pinochet y los Ministros del Trabajo, Economía y Hacienda, petitorio que una vez más no ha respondido y donde se plantean las situaciones más urgentes de los trabajadores chilenos como son el ingreso mínimo de 25 mil pesos, el reajuste familiar, de los bonos de locomoción, de colación y las reformas legales necesarias a una mayor participación de los trabajadores a las tareas nacionales.

TRABAJADORES EN DEFENSA

El jueves 7 de abril marcó un hito en la vida del sindicalismo chileno. Por primera vez en 15 años, los trabajadores ferroviarios realizaron un paro de brazos caídos de 12 horas, a partir del mediodía. La convocatoria hecha por la Federación Nacional Ferroviaria y los distintos sindicatos encontró una amplia adhesión de los trabajadores, que en forma masiva hicieron abandono de sus labores desde los Andes a Temuco, paralizando prácticamente toda la red sur.

El paro fué además combativo. Piquetes de trabajadores bloquearon la vía férrea, realizaron marchas y mitines en las maestranzas, estaciones o sedes sindicales, evitando caer en confrontaciones con las fuerzas especiales de carabineros que llegaron rápidamente a los puntos más neurálgicos. Los únicos enfrentamientos fueron verbales y se dieron entre trabajadores y el Director General de la empresa Roberto Darrigrandi, cuyos desaciertos administrativos e intentos solapados por privatizar una institución que es patrimonio nacional causaron la movilización de los trabajadores.

A partir del mediodía del jueves 7 de abril, no circularon más trenes en la red sur, pese a que Darrigrandi proclamó que sólo un 10% de los trabajadores había adherido al paro. El régimen respondió de inmediato a las demandas laborales, en la forma que siempre lo ha hecho. Cortó abruptamente toda posibilidad de diálogo. El ministro de transportes, general Jorge Massa, canceló una audiencia con los dirigentes sindicales y dijo que no dialogaría mientras hubiera paro. La verdad es que al cumplirse la movilización, tampoco hubo diálogo.

Por el contrario, la empresa publicó una carta que se había en-



Las estaciones vacías fueron la muestra más clara de la magnitud del paro ferroviario.

viado a todos los funcionarios, con la advertencia de que podrían ser despedidos sin indemnización por participar en tales convocatorias. Los dirigentes sindicales, en tanto, fueron claros: el paro se realizó en demanda de la salida de las empresas contratistas que operan al interior de Ferrocarriles, asumiendo muchas tareas de la institución, y a través de las cuales se está concretando en forma solapada la privatización de los servicios impulsada por Darrigrandi. Al terminar el paro de brazos caídos, los dirigentes reiteraron sus deseos de diálogo y advirtieron que no se aceptarían represalias.

Represalia y Respuesta

La dirección de Ferrocarriles, cumpliendo las órdenes del régimen, optó por la mano dura.

En los mismos momentos en que se conocía la carta-advertencia dirigida a los trabajadores, 73 de ellos eran notificados de despido. Diecisiete de los afectados eran dirigentes sindicales.

En forma sibilina, Darrigrandi dijo que no era su intención reducir personal. Por ello publicó avisos en la prensa, requiriendo más de 100 operarios, principalmente ayudantes de maquinistas. Dijo que los despedidos eran "provocadores" y "violentistas" que por "razones políticas" habían organizado el paro y que los "auténticos" trabajadores no respondían a tales directivas.

Si el régimen y Darrigrandi pensaron que con ello resolvían el problema se equivocaron. El martes 12 de abril, los servicios de carga y pasajeros se detuvieron por completo. Con gran unidad y disciplina, los trabajadores aco-

FERROVIARIOS: A DEL PAIS



Los trabajadores en paro han mostrado una absoluta unidad en su confrontación con la dictadura.

gieron la convocatoria a un paro indefinido de actividades. A las demandas se sumaron dos nuevas: el reintegro de los despedidos y la salida de Roberto Darrigrandi de su cargo, ya que fue considerado interlocutor no válido por los trabajadores. Los dirigentes reiteraron la necesidad de una entrevista con el ministro de transportes. Pero el general Jorge Massa reiteró su apoyo a Darrigrandi. Dijo que los despidos eran irreversibles y publicó audiencias con los escasos dirigentes sindicales que no estaban en el paro, algunos de ellos traídos desde el norte grande.

Al mismo tiempo, Darrigrandi aseveró que el paro era mínimo, que sólo un dos por ciento adhería. Pero la verdad es que sólo tres trenes pudieron ser movilizados ese día, uno de ellos bajo escolta de un helicóptero

militar.

Una Prueba de Fuerza

Los trabajadores denunciaron que estos trenes fueron movilizados por personal jubilado anteriormente despedido. Incluso, un tren a Concepción fue conducido por un jefe de boleteros. En forma absolutamente irresponsable, Darrigrandi arriesgaba vidas humanas y bienes materiales, en su desesperación por quebrar el movimiento laboral...

La situación cobró más gravedad al segundo día de paro, cuando un improvisado maquinista no supo frenar al llegar a la Estación Alameda y se estrelló contra las barreras de contención al final de la vía, a escasos metros de la Alameda Bernardo O'Higgins. Mientras los sindica-

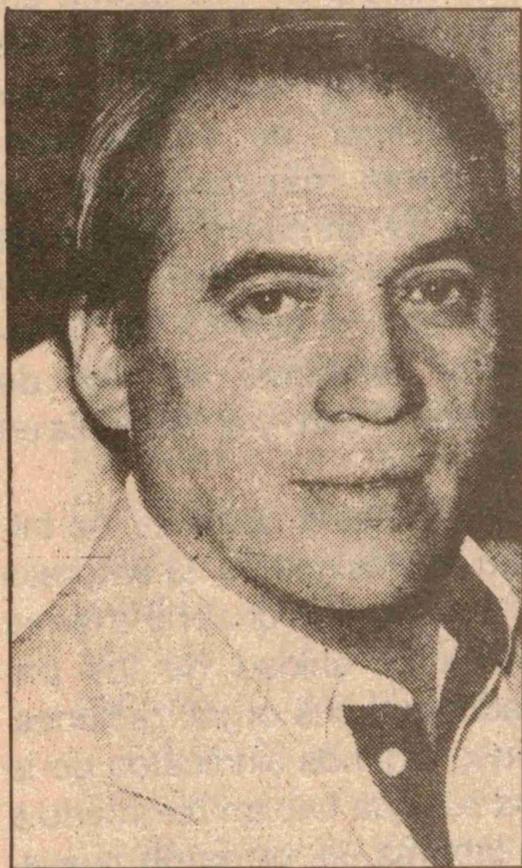
tos denunciaron que el tren era conducido por un maquinista dado de baja hace cuatro años por padecer de hipertensión, Darrigrandi aseguró que se trataba de un nuevo sistema de frenaje "europeo". Este segundo día de paro el director de Ferrocarriles reconoció un 15% de adhesión al paro y el tercer día un 12%.

Una semana después de iniciado el movimiento, la empresa no había logrado quebrar la férrea voluntad y unidad de los trabajadores y sus organizaciones. Incluso algunos sindicatos de la zona sur que habían retornado a sus labores, se plegaron nuevamente a la movilización.

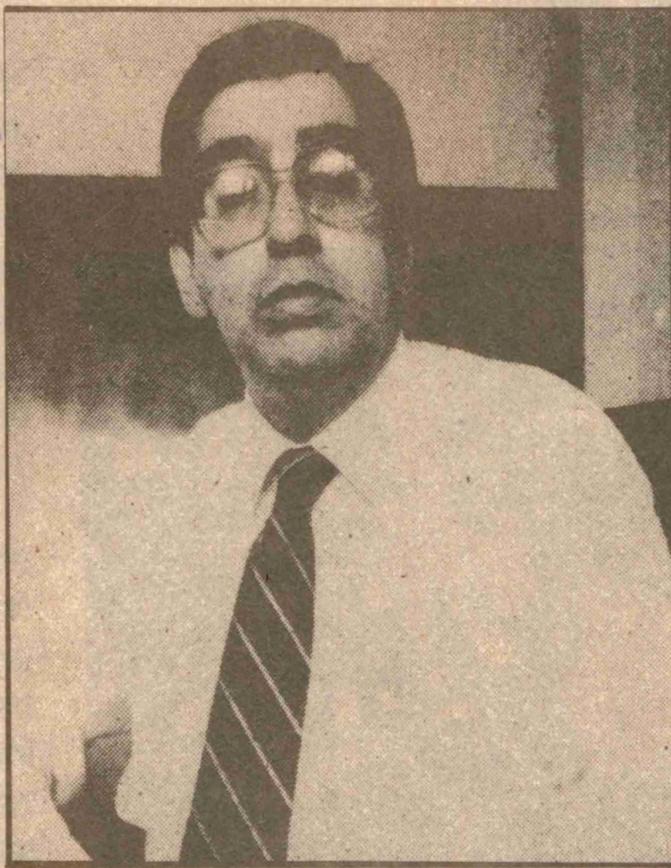
UNA NUEVA VERSION DE FEDERICI

A estas alturas del conflicto, la opinión pública ya tenía la impresión de encontrarse frente a un singular personaje. A muchos recuerda la imagen del fugaz y controvertido rector de la universidad de Chile José Luis Federici, que dicho sea de paso, también pasó por la Dirección de Ferrocarriles e inició su proceso de destrucción. Nos referimos a Roberto Darrigrandi, el actual titular de la empresa, y curiosamente, funcionario de carrera en ella.

Al asumir su cargo, hace un par de años, Darrigrandi planteó ante el Consejo Económico y Social una catastrófica situación de Ferrocarriles, culpando de ella a sus antecesores y principalmente a Federici. Lo acusó de haber reducido la planta funcionaria de 22.000 a 7.000 trabajadores, y de haber endeudado a la empresa en el sistema financiero, en UF, para pagar las indemnizaciones a los despedidos. Prometió que, como funcionario de carrera, iniciaría un proceso de recuperación. Lo que Darrigrandi no dijo en esa oportunidad, ni tampoco después, es



José Criado, presidente de la Federación Ferroviaria.



Roberto Darrigrandi, un "Federicci" con la misión de destruir Ferrocarriles.

que su fórmula mágica consistía ni más ni menos que en la privatización solapada de la empresa, mediante la entrega de diversos servicios a empresas privadas que, con nada de inversión obtienen grandes utilidades, mientras Ferrocarriles continúa su proceso acelerado de deterioro, que ha sido su característica en los años de dictadura.

Durante el régimen militar, Ferrocarriles ha suprimido prácticamente todos sus ramales, además de la red norte en casi toda su extensión. Sus equipos rodantes son los mismos de hace veinte o más años, refaccionados hasta el infinito. El resultado es un servicio ineficiente, obsoleto, lento y caro, que no puede competir con los servicios de transporte terrestre. Todo ello a causa de la política de autofinanciamiento impuesta por el régimen, que llevó a suprimir todo aporte estatal desde 1980. Ello, unido al despido de 66% de su personal ha casi destruido una empresa que no obstante, continúa poseyendo valiosos activos.

Todos los expertos en la materia coinciden en señalar que sin un

gran aporte del Estado la empresa no tiene remedio. Pero el régimen no tiene intenciones de hacer el esfuerzo. Su objetivo, desde un comienzo, has sido desvalorizar el servicio para después ofrecerlo barato al sector privado. Incluso ya existe un proyecto que convierte a Ferrocarriles en Sociedad Anónima administrada por la CORFO, que es el paso previo a la privatización.

Contra toda esta situación es que se alzaron los trabajadores. Y es por ello, que puede decirse que el paro no fue sólo por reivindicaciones puntuales, sino en defensa del país, del patrimonio de todos. Y es por eso, también, que su lucha mereció una solidaridad más allá del apoyo moral que las cúpulas tímidamente expresaron en los primeros días de conflicto. Pero, al cierre de esta nota, la situación no había variado. Las grandes organizaciones sindicales continuaban "solidarizando" de palabra con los trabajadores ferroviarios, y llamando al mismo tiempo al "diálogo" de todos los sectores para una pronta "solución". Lo cierto es que la lucha de los ferroviarios merecía más, mucho más.

"Nosotros, sacerdotes y religiosas de los sectores populares de Santiago, discípulos del Señor de la Vida, evangelizadores del Reino de Dios, aquí en Chile hoy, animadores de la fé y del caminar de las Comunidades Eclesiales de Base, testigos de la vida, el sufrimiento y la esperanza de los pobres, sentimos que estalla nuestra conciencia y no podemos seguir callando. Es necesario que hablemos desde el sufrimiento de los empobrecidos y ante la grave situación del país, a la luz del Evangelio de Jesucristo..."

A sí comienza la "Carta Abierta a la Opinión Pública" que 150 sacerdotes y religiosas entregaron a los medios de comunicación y a la que han adherido cientos de religiosos más. En el documento dicen que, como pastores que ejercen su ministerio evangelizador en medio del pueblo, constatan una experiencia de muerte colectiva, cuyos síntomas son la situación de extrema pobreza que degrada y envilece la vida del pueblo, el atropello y violación de los derechos humanos, personales y sociales, el permanente clima de guerra disfrazada, la falta de perspectiva para los jóvenes, la voluntad del régimen de proyectarse al futuro, imponiendo el plebiscito... "No podemos callar lo que hemos visto y oído"... dicen los religiosos, y agregan que no pueden aceptar que se mantenga esta situación, sustentada en el actual modelo económico y político y en la doctrina de seguridad nacional. "En nombre del Dios de la vida, en quien creemos -dicen- en nombre del sufrimiento del pueblo, responsabilizamos de todas las atrocidades vividas, a una persona: Augusto Pinochet".

El padre Eugenio Pizarro, párroco de Santa Filomena, es

Padre Eugenio Pizarro: y nuestra conciencia estallo...



uno de los firmantes de esta carta.

-Con esta carta ¿no se están "metiendo en política"?

-Política es todo aquello que busca el bien común, el bien de la ciudadanía. A nosotros nunca se nos ha prohibido meternos en temas políticos. Lo que se nos prohíbe, por nuestra condición de pastores, es que usemos de nuestro cargo pastoral para hacer proselitismo político partidario.

Medellín toca temas políticos. Puebla toca temas políticos, el Papa, los obispos, hablan de cosas contingentes. Las predicaciones nuestras son políticas. Además la evangelización, que es tarea específica de la Iglesia, es apoyo a los pobres, libertad a los cautivos, consuelo al afligido, vista a los ciegos, anuncio del

amor y debe tocar todos los aspectos de la vida humana. Nada de lo humano es indiferente a la tarea evangelizadora, ésta no puede tocar las cosas con un barniz decorativo sino ir a la raíz misma de la experiencia humana.

Nuestra carta sí, es política. Como es político el mensaje de navidad que entregaron los obispos, en el que pedían condiciones básicas para el plebiscito. Aquí está en juego la moral, en política también está cuestionada la moral. Un hombre público como el que ostenta el cargo de Presidente de la República, por ejemplo, se expone a un juicio moral público. Y si además es una persona que quiere continuar en el cargo, nosotros tenemos que hacer un juicio moral de sus ac-

tuaciones, eso está dentro de nuestra tarea de pastores, de evangelizadores.

Entonces nosotros, sacerdotes, religiosas, misioneros laicos, hemos visto el sufrimiento y las lágrimas del pueblo; hemos visto la cesantía, el hambre, la falta de salud, que los jóvenes no tienen horizontes, hemos visto la represión, la inseguridad que los que detentan el poder llaman "doctrina de seguridad nacional", que se miente tanto, que llegó el momento en que nuestra conciencia estalló. Y conscientemente, sabiendo que nuestros obispos, por su investidura, no pueden usar nuestro lenguaje, hablamos. No podíamos lavarnos las manos.

Si bien es cierto que el lenguaje es diferente, el contenido de nuestra carta no entra en contradicción con el magisterio de la Iglesia expresado en el Concilio Vaticano segundo. En sus documentos se habla con un lenguaje mucho más duro que el nuestro. También en los documentos de Puebla hay un capítulo que se llama "Compartir las angustias", donde se dice lo mismo que hemos dicho nosotros. Los obispos de Chile también han hablado a veces mucho más claro que nosotros. En las últimas orientaciones pastorales 86-89, expresan el mismo contenido de nuestra carta y agregan... "si nosotros calláramos, hasta las piedras hablarían. Y Dios nos consideraría malos pastores".

-¿Y está también de acuerdo con la posición de los obispos respecto del plebiscito?

-Los obispos han dicho que una garantía para que el plebiscito sea limpio y honesto es que haya mucha inscripción electoral. Pueden tener razón. Pero hay otras condiciones que ellos han puesto... y yo quisiera que esas condiciones ellos las evaluarán y si no se dan, declararan ilegítimo

el plebiscito. y no sucediera lo de 1980, que pusieron condiciones básicas, no se cumplieron y no pasó nada.

Ahora, y esto a título personal, a mí no me gusta el rayado de cancha... y no creo en el plebiscito, creo que en este momento existe un fraude.

-¿Por qué en este momento?

-Porque hay estado de emergencia, existe una ley que da atribuciones al Presidente de la República para detener a quien quiera en cualquier parte, encarcelarlo. Existe el artículo octavo, que proscribía las ideas; la libertad de expresión es hasta por ahí no más. Existen detenciones arbitrarias, una justicia atada y sometida que nunca favorece a los más pobres, hay asesinatos que no han sido aclarados, secuestros, desaparecidos, torturas, hay amenazas de muerte, militares en la calle, represión en las poblaciones, allanamientos... y hay también cohecho. Se está condonando dividendos a los deudores para que digan que sí. Las municipalidades han abierto

oficinas especiales para atender los casos de pobreza, siempre que digan sí. Yo recibí una carta, con un remitente por supuesto falso, en la que se denigra a autoridades eclesiásticas, al padre Felipe Barriga, al padre Cristián Precht y a otros más, y hay panfletos contra los obispos Carlos González y Carlos Camus, amenazas de muerte al Cardenal Silva, a mí mismo... con todo esto... ¿existe o no existe fraude? ¿Se puede votar libremente con una campaña así? Los medios de comunicación hasta utilizan al Papa para candidatear a Pinochet y aunque aparentemente se abren un poco a los partidos políticos, excluyen a los partidos que mayoritariamente representan al pueblo... ¿Se puede hablar de un acto plebiscitario limpio y libre si Pinochet, candidato, gastó en el verano cien millones de pesos en su viaje al norte? ¿De dónde salió esa plata?

-En esta situación ¿qué camino queda al pueblo?

-Yo creo que el pueblo ha sufrido mucho. Le dijeron que había

que protestar y salió a protestar. Le dijeron que no había que inscribirse en los registros electorales y ahora le dicen que sí hay que hacerlo. Le dijeron que no había que creer en la ley electoral y ahora ve que algunos partidos políticos se están inscribiendo. Le dijeron que no había que entrar en el juego del plebiscito y ahora ve que partidos que eran de su confianza, están haciendo campaña por el no. Y está confundido.

Lo que el pueblo necesita es que las cúpulas políticas, sus conductores naturales, busquen una salida. yo creo que la gran mayoría aplaudiría un programa alternativo al plebiscito, al sí a Pinochet o al no a Pinochet. Un gobierno provisorio que llamara a elecciones libres...

Yo, como sacerdote, como pastor, apoyaré aquello que signifique el comienzo de un proceso en el cual el pueblo movilizado sea el gestor de su propia historia. Y, como dice la Carta, nuestra responsabilidad es hacer posible esto con unidad, verdad, organización y movilización.

PRONTUARIO

Coronel José Zara Holger

Noviembre 1985 - Ascendido a coronel y nombrado Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

2 Abril 1986 - En Colina, ofrece a Pinochet ser "obstáculo para sus enemigos"

16 Abril 1986 - Con la cara pintada, llevó a sus comandos armados contra los estudiantes de Medicina de la U. de Chile.

17 Abril 1986 - Siempre con la cara pintada y con tanquetas, atacó a los estudiantes de la U. Metropolitana.

31 Marzo 1988 - En Colina, ante Pinochet, amenazó al país con los "corvos brillantes y acerados".



Ya hemos establecido previamente lo que entendemos por derechos populares y cuales son aquellos "antecedentes imprescindibles" para su realización, debemos ahora abocarnos a precisar cuales son aquellos derechos básicos o necesidades básicas que deben ser satisfechas. Al iniciar este ciclo decíamos que derechos populares son aquellos que garantizan y satisfacen los requerimientos de vida plena de los sectores populares, cuando a través de una norma es posible exigir su efectivo cumplimiento.

A partir del 11 de septiembre de 1973 se inicia una práctica encaminada a ir limitando o desconociendo los derechos básicos de la población. Desde ese momento se empieza a producir una manifiesta contradicción entre las leyes que dictadas con anterioridad a 1973, y producto de largas e incanzables luchas de los sectores populares, tendían a garantizarles sus derechos, y la situación real que comenzó a desarrollarse en el Chile dictatorial.

Con posterioridad este desajuste o contradicción entre ley y realidad tendió a ir desapareciendo o aminorándose, no por que la realidad cambiara, y se respetaran los derechos básicos de las mayorías, sino por que las normas legales que antes, intentaban posibilitar la protección de los intereses populares, comenzaron a ser cambiadas por otras más coherentes con todo el sistema que se estaba implementando y que, sin duda, esta concebido para favorecer los intereses de los poderosos del país y sus aliados extranjeros.

A partir de 1975, paralelamente a la política de "shock" que en materia económica se impulsa, se comienza a hablar de las modernizaciones del Estado, que no son otra cosa, que las más radicales transformaciones que pudieran

PINOCHET y los pactos de derechos humanos

concederse en contra del pueblo en relación a sus derechos básicos. En ediciones posteriores, y al referirnos en específico a algunos de los más importantes derechos populares, trataremos en particular cada una de estas modernizaciones.

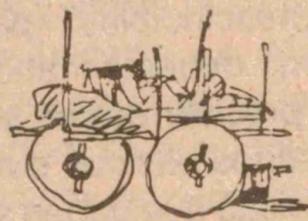
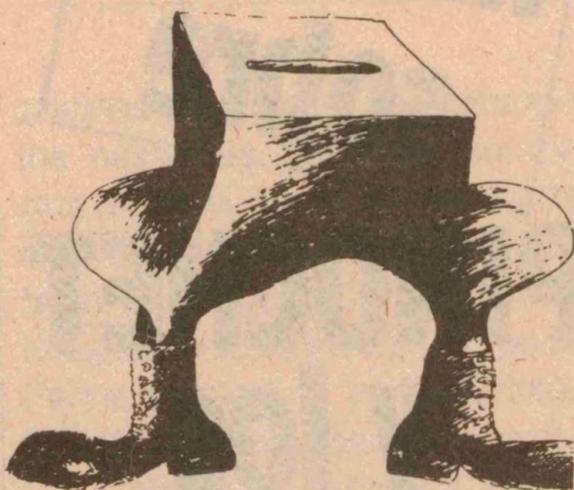
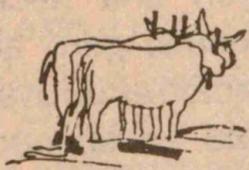
A fin de encuadrar desde ya el marco de nuestros próximos aportes señalaremos aquellos derechos que desde la perspectiva de los intereses de las grandes mayorías, deben ser considerados: el derecho a la vida, y todos los derechos que deriven de éste; el derecho al trabajo y a la justa remuneración, al descanso, a la previsión y seguridad social; el derecho a la educación en sus diferentes formas y niveles, el acceso a la cultura en general y el respeto a las diversas manifestaciones culturales: el derecho a la salud pública y a la higiene ambiental; el derecho a una vivienda digna; el derecho a acceder a los distintos niveles de la Justicia; etc.

Todos estos derechos, aún cuando hoy hayan sido limitados o incluso erradicados de nuestra legislación producto de las modificaciones introducidas durante estos últimos años y en especial

dentro del marco que la Constitución de 1980 impone, no han dejado de ser exigibles por el pueblo, en primer lugar porque constituyen una necesidad de sobrevivencia, pero además su consagración es un avance que la humanidad en su conjunto, ha dado y esto queda de manifiesto en los diversos instrumentos internacionales, algunos de ellos con carácter vinculante, es decir que imponen obligaciones a los ESTADOS que se comprometen.

Chile en su vida democrática anterior a 1973, participó en los diversos foros internacionales que dieron origen a los grandes acuerdos que sobre Derechos Humanos existen hoy en día; es el caso de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, consagración efectiva de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Estos Pactos fueron suscritos en 1966, y en ellos están contenidos en términos generales una amplia gama de derechos, muchos de los cuales tienen relación con el asesoramiento de la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos. Estos Pactos, sin embargo, a través de un subterfugio de la dictadura no se han convertido en leyes internas de la nación. Pacto de similar característica constituye el suscrito en 1969 en San José de Costa Rica por los países miembros de la O.E.A., que también recoge la problemática y los intereses de las grandes mayorías de los países americanos.

Sin duda la sola referencia a estos instrumentos internacionales, es insuficiente para ver efectivamente consagrados estos importantes derechos en la vida práctica, por tanto siempre será imprescindible que el propio pueblo, titular de sus derechos, exija de manera activa su cumplimiento.



¿La carreta delante de los bueyes?

En la medida que transcurre el tiempo el nudo de la situación política es cada día más claro: el plebiscito va adquiriendo la característica de una pelea entre "los de arriba", en tanto "los de abajo se sienten convocados a participar pero aún no dan con la fórmula precisa que, puntos más o puntos menos, debiera tener dos ingredientes. De una parte aprovechar el espacio par ampliar las posibilidades de logros reivindicativos específicos, y de otra intervenir en el debate nacional con un programa nacional, popular y democrático que oriente al movimiento popular desde una óptica clasista e independiente.

Si reconocemos que la especificidad del combate plebiscitario es eminentemente interburgués y que las propuestas levantadas por el movimiento popular (elecciones libres) no lograron transformarse en una fuerza capaz de imponerse, para los revolucionarios sólo queda una pregunta pendiente: cómo aprovechar la coyuntura para fortalecer las fuerzas del pueblo?. Hay varias opciones y algunas de ellas ya probadas. Al menos dos de ellas las podríamos descartar de inmediato: la primera, es intervenir desde fuera del escenario político-electoral, (que es lo mismo que no intervenir), actitud que han tomado pequeños agrupamientos de izquierda. La segunda, también errónea, es intervenir renunciando a la independencia y a postulados elementales, como fue el caso de los partidos de la IU que firmaron el pacto de los 13. Tanto una política de exterioridad a la coyuntura, y por lo tanto de exterioridad a lo que preocupa y cada día preocupará más a las amplias masas, como una política de subordinación a la pelea interburguesa, son tácticas que debilitan al movimiento popular, que no le permitan acumular fuerza ya que lo aíslan o lo desdibujan. La cuestión, entonces, es dar con una fórmula adecuada.

Desde una perspectiva revolucionaria debemos considerar los dos elementos estratégicos que enmarcarán cualquier fórmula táctica. El primero, ya señalado, que la táctica fortalezca las fuerzas del pueblo y, el segundo, que golpee al enemigo principal. En este caso el enemigo principal es el proceso de

institucionalización de la dictadura, proceso que se puede dar bajo la fórmula pinochetista o de pacto interburgués sin Pinochet. Sobre este doble aspecto debe actuar la política del campo popular. Estos criterios rectores operarán sobre una situación concreta en lo político, social y material. Es decir, una táctica adecuada tendrá que intervenir en un escenario de lucha interburguesa con participación de masas. Esto es lo clave. No es un escenario de pugna de los "de arriba" encuadrado en las ocho manzanas del barrio cívico, sino que es con "participación de masas". Que esta participación de masas adquiera la forma de "masa de presión para la negociación" (fórmula de la oposición burguesa y pequeñoburguesa) o de movimiento de masas de protagonismo popular, es una cuestión que depende en forma exclusiva de la política de la izquierda clasista definida. Debemos ser absolutamente nítidos: la disputa por la conducción en los movimientos sociales, la lucha por la hegemonía en la conducción del movimiento de masas, se está dando, y en el futuro se dará con más fuerza, en un escenario eminentemente político-electoral.

Por ello, quedarse al margen del escenario político-electoral es regalarle la conducción de las masas a la oposición burguesa, y subordinarse a su estrategia (aunque sea más en lo estratégico que en lo programático, como es el caso de los partidos de izquierda del grupo de los 13) es regalarle masas a la conducción burguesa. Ambas fórmulas cooperan a que el movimiento social pueda ser transformado en una "masa de presión".

Desde este punto de vista, la cuestión se va centrando en tener como norte ambos criterios estratégicos (fortalecer al movimiento popular y golpear el proceso de institucionalización) a la vez que concentrarse en la disputa por la hegemonía de la conducción de las masas donde ellas están, sin sumarlas a la oposición burguesa ni alejarse de su dinámica política real.

Para luchar contra la institucionalización de la dictadura hay que continuar con más fuerza que

nunca en la lucha contra el "proceso de fraude", deslegitimar al máximo el evento plebiscitario. Para fortalecer las energías del movimiento de masas y alentar su recuperación de confianza básica hay que conducir y apoyar todos los conflictos sociales por las demandas reivindicativas. Para ganar a las masas para una conducción democrática y popular hay que meterse en el escenario político-electoral con un programa propio. Un programa sencillo y claro que plantee las cuestiones políticas (Gobierno Provisional y Asamblea Constituyente); económicas (programa de emergencia para los 5 millones de pobres); sociales (educación, salud, salarios) y de democratización (FF.AA. y poder judicial), de justicia (derechos humanos). En una palabra, levantar un programa de claro contenido popular que permita a las masas y a la izquierda "moverse" en el escenario político-electoral con perfil propio a la vez que haciendo claridad de que todo eso es conquistable sólo con el derrocamiento de la dictadura. Una fórmula que considere estas características permitirá no sólo confrontar al régimen sino que "desnudar" las políticas burguesas opositoras y, lo más importante, disputar la conducción del movimiento de masas en el lugar donde las masas están.

Si para acercarse a la globalidad de las masas con el objetivo de disputar su conducción en vistas de objetivos tácticos acertados (agitar programa popular, conciencia de la necesidad del protagonismo y del derrocamiento del régimen, etc) y con el norte estratégico claro (golpear la institucionalización y fortalecer el campo popular), se hace necesario inscribirse en los registros electorales o meterse en la dinámica del "no", son cuestiones secundarias, detalles a resolver en función de los criterios estratégicos y de los propósitos tácticos.

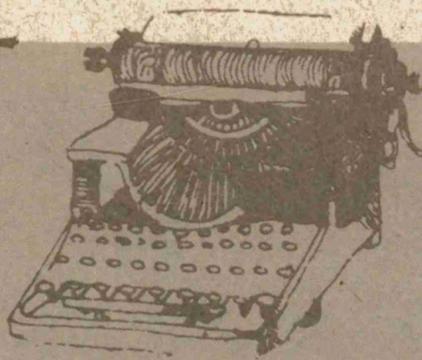
Hasta ahora la izquierda consecuente ha sabido acertadamente separar aguas de la exterioridad absoluta y de la subordinación; sin embargo hemos sido incapaces de dar con la fórmula adecuada. Hemos actuado con temor y conservadurismo, lo que nos lleva a definir lo que no hay que hacer, empero no lo que hay que hacer. Ha contribuido a ello el poner como eje de la discusión la cuestión de la inscripción y del "no" en vez de los criterios estratégicos y los propósitos tácticos. Sin duda cuando se coloca la carreta delante de los bueyes es bien difícil no sólo dar con el camino, sino que siquiera moverse.

El Mirador, 28 abril 88.

Nadie para al Fiscal ad hoc

La Corte Marcial y eventualmente la Corte Suprema tendrán que pronunciarse en definitiva acerca de una solicitud presentada por seis abogados para que el fiscal militar ad hoc Fernando Torres Silva deje de estar a cargo del proceso por el atentado contra el General Augusto Pinochet y su comitiva, ocurrido en septiembre de 1986.

En primera instancia, el juez militar de Santiago, general Jaime González, rechazó la solicitud, que fue presentada por los abogados Alfonso Inzunza, Fernando Iturra, Fernando Zegers, Salvador Zegers, Juan Pavin y Alberto Espinoza, quienes son los defensores de algunos de los reos en el proceso. La solicitud se basó en disposiciones expresas del Código Orgánico de Tribunales, luego que el fiscal militar ad hoc ha dado públicas muestras de su falta de imparcialidad y ha predicado sentencias, también en forma pública, cuando la investigación ni siquiera ha concluido.



El abogado Alfonso Inzunza declaró que el dictamen del juez militar no contiene ningún fundamento jurídico, y se limita a señalar que las denuncias de los abogados "no son suficientes". Por ello, se presentó un recurso de queja y otros de apelación ante la Corte Marcial. Si este tribunal, integrado mayoritariamente por uniformados conforma el criterio del juez, los abogados recurrirán a la Corte Suprema.



Tribunales siguen encubriendo a implicados en el caso Letelier

La cuarta sala de la Corte Suprema vetó casi todas las preguntas contenidas en el exhorto que la justicia norteamericana envió al general en retiro Héctor Orozco, en relación al

asesinato del ex canciller Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronnie Moffit. De 200 preguntas, la Corte Suprema sólo permitió que le sean formuladas 12 al general Orozco, justamente las de menor importancia.

De este modo, el general Orozco podrá seguir disfrutando de una tranquila vida en retiro, pese a que las confesiones de Armando Fernández Larios sembraron una serie de dudas acerca de su proceder como fiscal de la investigación que se realizó en Chile acerca del homicidio de ex Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Salvador Allende. Fernández Larios acusó a Orozco de ayudar directamente al general Manuel Contreras a preparar las coartadas que permitieran al ex jefe de la DINA y a los demás implicados en el asesinato eludir la acción de la justicia.

Los magistrados de la Corte Suprema con tan curioso sentido de la justicia son Víctor Rivas, Servando Jordán y Enrique Zurita, apoyados por los abogados integrantes Juan Colombo y Cecil Chellew.



Panamá

NORIEGA SE MANTIENE FIRME



La dominación yanqui: el verdadero trasfondo de la crisis Panameña.

El imperialismo norteamericano podría convertirse en el tigre de papel que Mao Tse Tung describió. Panamá, un país que en épocas anteriores la Casa Blanca hizo y deshizo a su gusto, un país sin gobierno popular, carismático o especialmente honesto, hoy sigue resistiendo todos los esfuerzos de la administración Reagan para someterlo.

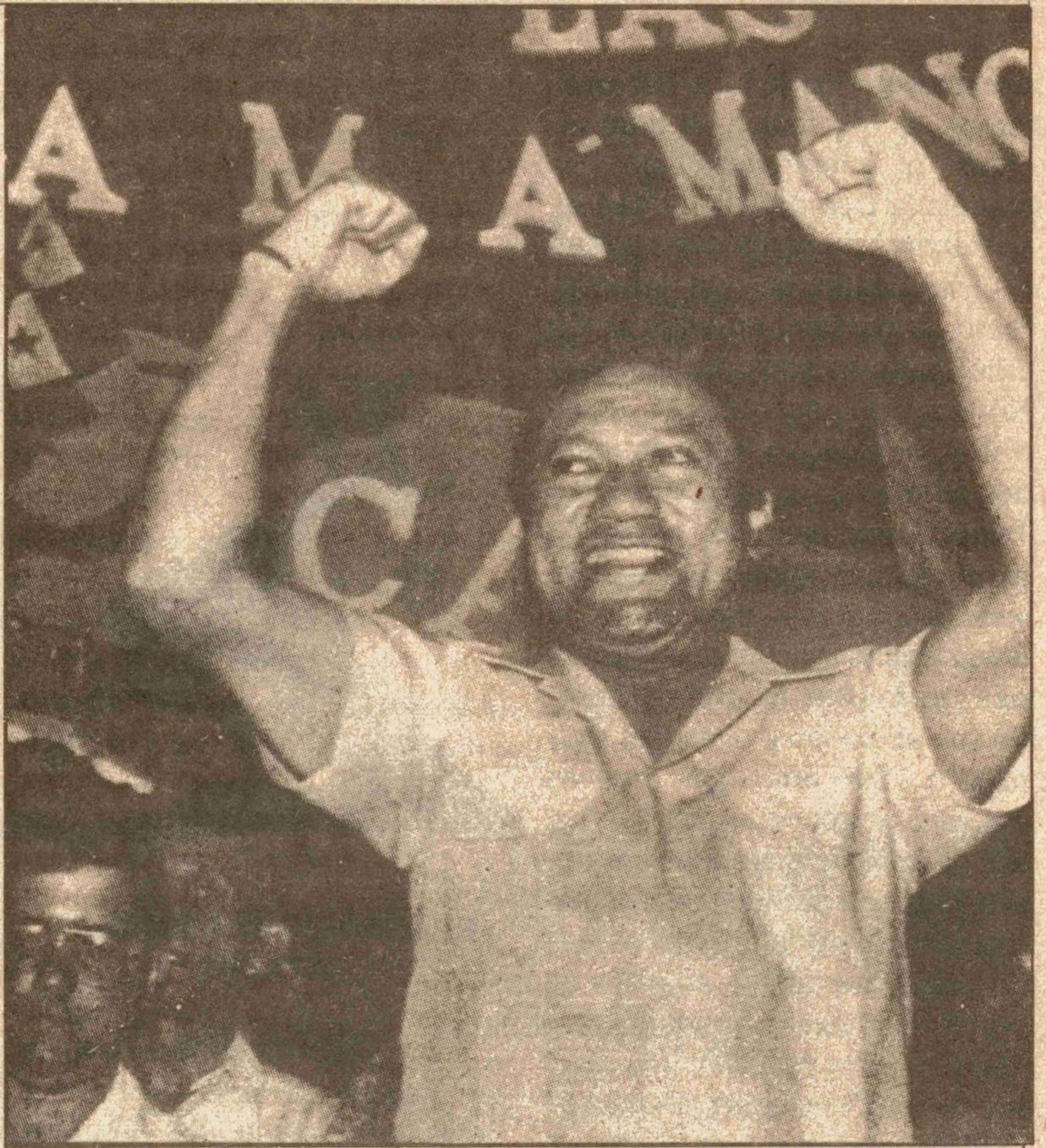
La crisis actual empezó el 26 de febrero cuando el presidente Eric Delvalle anunció que había destituido al General Manuel Antonio Noriega, jefe de las fuerzas

de defensa y el verdadero centro de poder de su país. El mismo día la Asamblea Legislativa respondió deponiendo a Del valle y remplazándolo por Manuel Solís Palma. Del Valle, con el evidente apoyo de Estados Unidos, afirmó que seguía siendo el presidente legítimo. Sin embargo, Del valle también fue designado, no elegido, en 1985 cuando el presidente elegido en elecciones poco limpias el año anterior, Nicolás Ardito Barletta, fue también destituido. Estas pequeñas inconsecuencias no preocuparon a la administración

Reagan, que en nombre de la "democracia" declaró que Noriega "tenía que irse". Inmediatamente, la Casa Blanca suspendió toda ayuda económica, congeló los bienes panameños en bancos norteamericanos, y, sin derecho alguno cortó el pago a Panamá de ganancias generadas por el uso del canal. El partido de Reagan, los republicanos, bastante desprestigiados por el escándalo Iran-contras, seguramente imaginaron que una victoria rápida contra un país chico sería buena propaganda electoral.

UNA COLONIA AMERICANA:

En medio de este cuadro confuso aparecen las constantes de la vida política panameña: el canal, el intervencionismo yanqui, la banca y ahora el narcotráfico. En 1903 Panamá, en esa época una provincia de Colombia, fue declarada independiente por el gobierno estadounidense que quería construir el canal allá. El nuevo Estado firmó un tratado con los norteamericanos otorgándoles el derecho de intervenir militarmente según su gusto, lo que han hecho unas 20 veces. En la zona del canal, hasta 1977 totalmente controlada por los yanquis, el imperialismo estableció una serie de bases militares y la Escuela de las Américas, que entrenaba a oficiales latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia. En 1977, el líder nacionalista panameño Omar Torrijos, muerto poco después en un accidente aéreo nunca aclarado, logró negociar un nuevo tratado sobre el canal con el entonces Presidente Jimmy Carter: según el pacto, en el año 2.000 Panamá recibiría el control total del canal y las tropas norteamericanas estacionadas en la zona serían retiradas. El acuerdo fue atacado por el partido republicano y por su candidato para la presidencia en 1980, Ronald Reagan. Es claro que uno de los motivos del imperialismo para oponerse al General Noriega es su tenor de dejar la estratégica zona del canal en manos de un líder latinoamericano independiente. Desde que la crisis estalló, Reagan ha reforzado a los 10 mil soldados del Comando Sur en la zona con 2 mil 100 efectivos más. Sin embargo, estas tropas probablemente no van a entrar en combate por razones que se examinarán más adelante. En este momento la presión económica es el instrumento de



presión más poderoso que tiene el imperialismo.

En Panamá hay más de un centenar de bancos extranjeros con un activo de más de 50 mil millones de dólares antes de la crisis; las leyes panameñas sobre la banca son más liberales que las de Suiza. Una de las tácticas yanquis contra Noriega ha sido producir una fuga de capitales dejando el sistema financiero sin liquidez, ya que la única moneda que circula en Panamá es el dólar norteamericano. Las medidas de presión han tenido su efecto: el gobierno ha podido pagar a todos los empleados públicos, los bancos se han mantenido cerrados desde el comienzo de la crisis. Como resultado, el gobierno se ha visto obligado a tomar una serie de medidas de austeridad y de carácter popular: una moratoria sobre el pago de arriendos, la distribución de alimentos en los barrios populares, la ocupación militar de molinos harineros para-

lizados para asegurar la producción de pan, y la formación de una milicia de defensa llamada la "brigada de la dignidad".

UNA AGRESION EN MARCHA

La huelga patronal contra Noriega ha tenido resultados limitados y casi todo el comercio está funcionando de nuevo: la codicia de los empresarios, su deseo de ganar dinero, supera su anhelo de reemplazar al general nacionalista, quien nunca ha tomado medidas de fondo contra la burguesía nacional.

De hecho, con el transcurso de la crisis, algunas fuerzas políticas de la oposición se han acercado a Noriega, incluyendo el Partido Panameñista Auténtico de Arnulfo Arias, cuyo anti-norteamericanismo, se dice, pesa más que sus contradicciones con el guberlista Partido Revolucionario Democrático. Estos dos partidos

constituyen dos tercios del electorado, lo que indica un gran rechazo al intervencionismo. En cambio la Democracia Cristiana, en Panamá como en otras partes el instrumento fiel del imperialismo, se mantiene en la oposición. Otros factores son positivos para Noriega. A pesar de la administración Reagan, algunas grandes empresas yanquis, Eastern y Texaco, por ejemplo, siguieron pagando sus impuestos en dólares al gobierno panameño: la única lealtad que tienen los grandes capitalistas es con el precio de sus acciones y ni eso es muy seguro. Sin embargo, nuevas medidas anunciadas por Reagan el 8 de abril ordenan a las empresas y hasta a particulares norteamericanos residentes en el país no pagar impuestos además de prohibir los vuelos por aerolíneas como Eastern Panamá. Semejantes medidas contra Libia fueron burladas por la mayoría de empresas y individuos estadounidenses involucrados en la industria petrolera de ese país.

El dinero del narcotráfico es otro elemento que puede ayudar a Panamá a independizarse de ciertas formas de dominación yanqui. Noriega está acusado en Estados Unidos de colaborar con los narcotraficantes colombianos conocidos como el cartel de Medellín y un gran jurado en Miami ha pedido su extradición. No es claro si las acusaciones son verdaderas o no, pero es evidente que mucho dinero del narcotráfico pasa por Panamá. Tal vez valdría la pena examinar hasta qué punto el nacionalismo panameño refleja el surgimiento de esta nueva fuente de capitales. Noriega ha podido rechazar las presiones yanquis de apoyar a los contras nicaragüenses y ha podido ayudar a la guerrilla salvadoreña en una forma limitada o más bien simbólica.



REAGAN CON LAS MANOS ATADAS

Esta precaria independencia también está basada en la nueva debilidad política del imperialismo. A pesar de sus soldados en la zona del canal y de los más de 40 mil efectivos yanquis participando en maniobras militares en el Caribe, Reagan no se atreve a invadir Panamá. Un 65% del público norteamericano rechaza hasta cualquier ayuda económica de los contras; menos aún aceptarían el uso de soldados yanquis en la región, no por razones de solidaridad antiimperialista, sino simplemente porque no quieren morir por una causa en la cual ya no cree casi nadie. Asimismo, el envío en marzo de tres mil 200 militares norteamericanos a Honduras para amenazar a Nicaragua no quedó en nada. Es interesante recordar que hace 23 años una administración demócrata mandó esta misma unidad militar a Santo Domingo, causando la muerte de por lo menos tres mil dominicanos. Hoy, a pesar de las fantasías de Reagan los yanquis no pelean directamente y su presencia en Hondu-

ras fué condenada por sectores de la clase dominante yanqui, incluyendo el influyente diario New York Times y algunos congresistas del Partido Demócrata. Algunos días después, el gobierno sandinista firmó un acuerdo de paz con los contras, cuya derrota militar había llevado a Reagan a enviar los soldados. Las tropas, según los planes de la Casa Blanca, tenían que respaldar a los contras, pero, debido a la debilidad política de la administración republicana, fué imposible utilizarlas. El creciente apoyo electoral en EE.UU. para Jesse Jackson, el precandidato demócrata negro, de posiciones progresistas y a veces anti-intervencionistas, indica la crisis de hegemonía de los sectores ultra derechistas norteamericanos. No obstante, el precandidato demócrata de más peso, Michel Dukakis, compite con Reagan en demostrar una línea dura si no contra Nicaragua, si contra Panamá.

La política yanqui contra Noriega no logra el respaldo de los países latinoamericanos más reaccionarios. En una reunión de SELA (Sistema Económico Latinoamericano), 22 países de América latina y el Caribe, desde Cuba hasta Chile, votaron contra las medidas económicas contra Panamá. Si la aparente inhabilidad de la Casa Blanca a imponer su voluntad es el resultado de la crisis de confianza en la administración Reagan u obedece a factores más básicos es algo que se verá en los años que vienen. Es claro que el caso de Noriega, quien tiene el apoyo de muchos sectores burgueses nacionales y extranjeros, no se puede comparar con el de Allende, aunque muchas de las medidas tomadas contra los dos se asemejan. Lo que impresiona es que Noriega se mantiene firme a pesar del acoso intervencionista.

PALESTINA

CONTINUA LA MASACRE

Los palestinos siguen luchando contra la ocupación israelí de sus tierras ancestrales. La insurrección, que empezó en los primeros días de diciembre, recobró fuerza después de que un comando de Mossad, la CIA israelí, asesinó a Khalil Al Wazir, el segundo hombre de la OLP (organización para la Liberación de Palestina) y jefe militar de este movimiento de auto-determinación nacional. Al escuchar las noticias, el pueblo palestino salió a la calle, siendo dura-

mente reprimido. Por lo menos 19 palestinos murieron y 120 quedaron gravemente heridos cuando el ejército israelí abrió fuego directamente contra los manifestantes sin disparos de advertencia. Hasta ahora la represión ha cobrado alrededor de 170 vidas palestinas; varios de ellos han muerto por los efectos de gases nerviosos tóxicos, que hacen abortar a las mujeres e inmovilizan los músculos, provocando la muerte dentro de espacios cerrados. Según Hiddlestone, director de salud de las Oficina de Obras Públicas y Socorro de la ONU, soldados israelíes, aparentemente entrenados, ex profeso han desarrollado la técnica de golpearles los pómulos a los manifestantes hasta que se les salieran los ojos. La ciencia siempre avanza.



... STGO, PLAZA DE ARMAS

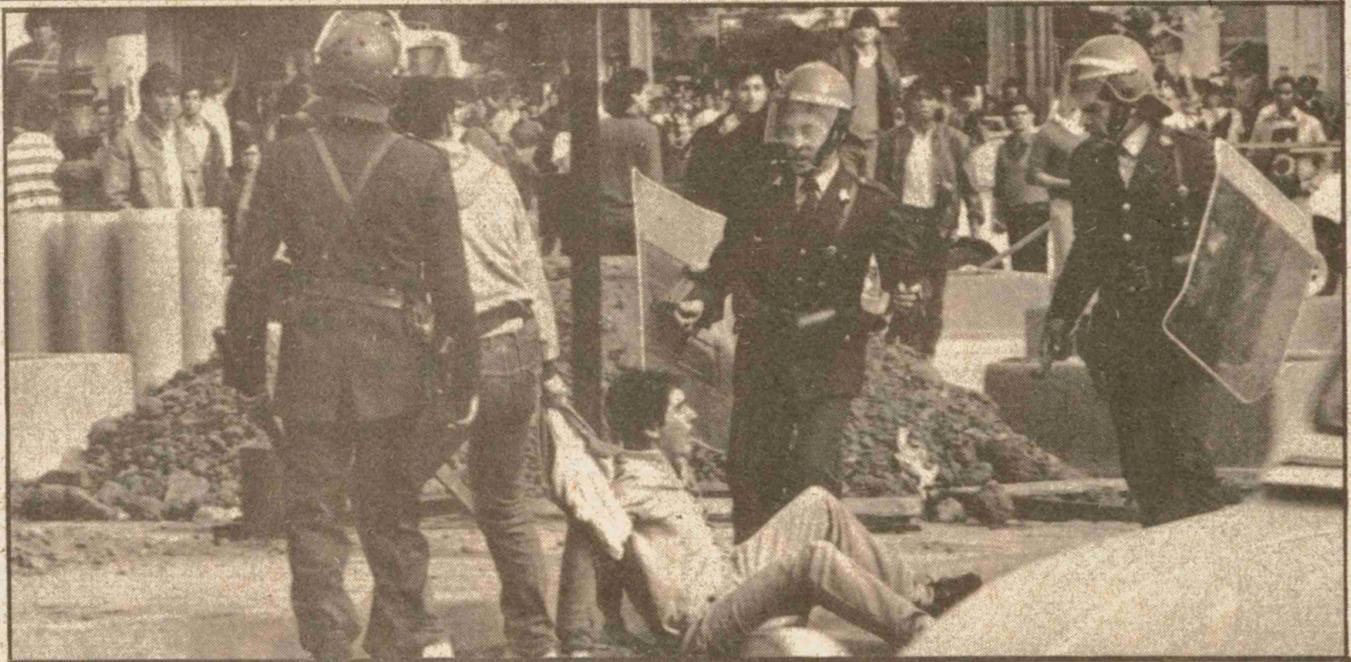
Comunidad palestina en Chile marcha en protesta por el genocidio contra su pueblo



**noticias
en fotos...**



El paro ferroviario generó espontaneas demostraciones de apoyo popular, que fueron reprimidas por carabineros y civiles no identificados.



La denuncia del Fraude Plebiscitario, tiene respuesta inmediata en los sectores populares. Mireya Baltra en la "Jornada para la democracia" realizada en la población "La Victoria".



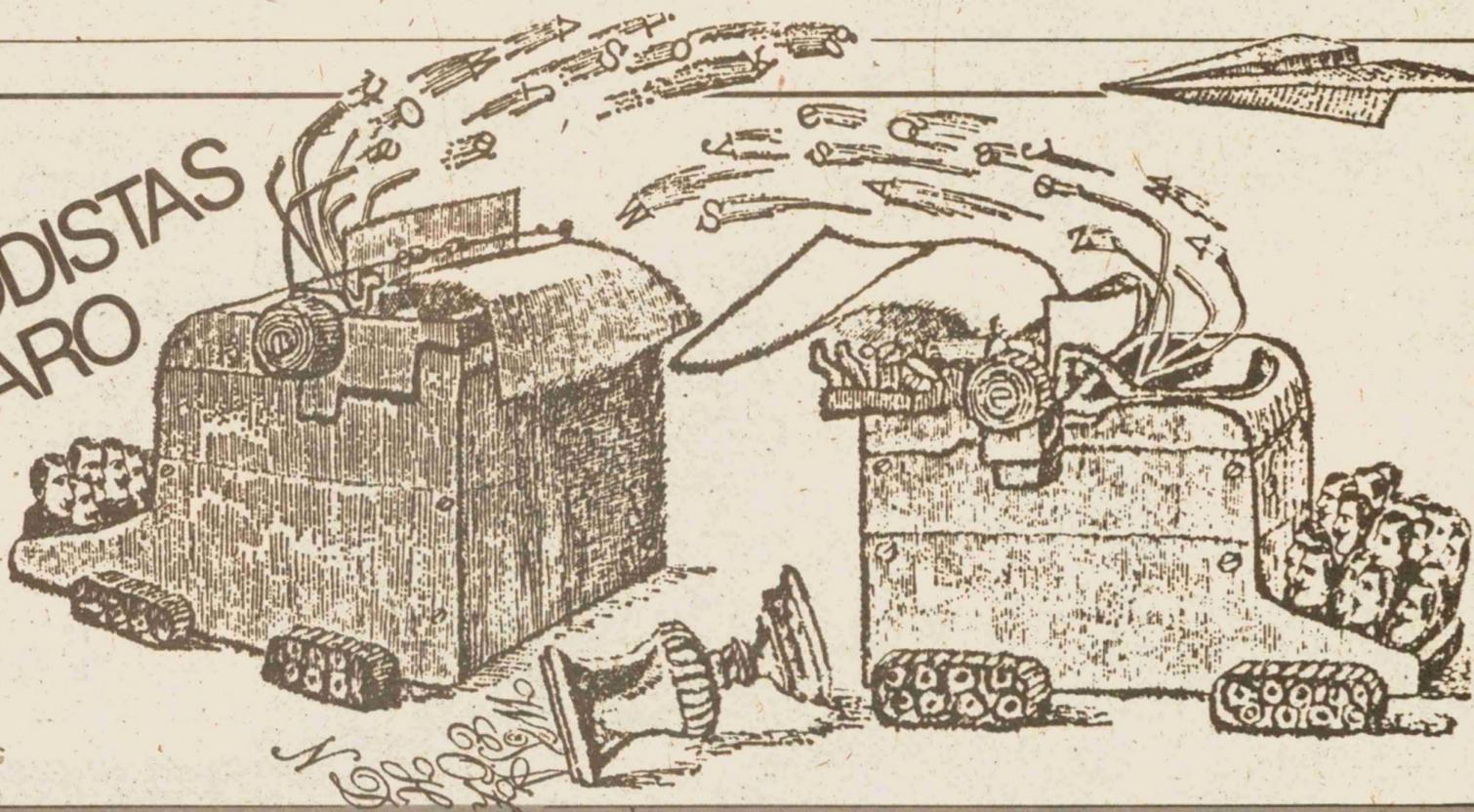
Estudiantes del liceo Latinoamericano de integración marcharon en Providencia el 29 de marzo, en recuerdo y homenaje a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en el tercer aniversario de su secuestro y asesinato por agentes de la dictadura.

Marcha de homenaje a los hermanos Vergara Toledo, asesinados por la dictadura. Villa Francia, 29 de marzo.

Los familiares del obrero del POJH, Pedro Mario Novoa, asesinado por funcionarios de la Municipalidad de Pudahuel el 11-Sept.-83, y de su compañero Víctor Núñez Alvarado, herido en la misma ocasión, demandaron a los autores en la suma de 24 millones de pesos, luego que la justicia dictó sentencias de prisión contra los criminales. Entre los reos figuran el ex alcalde Eduardo Bajut Aguirre, como cómplice, y también Raúl Arévalo Cruz, actual dirigente de un comando cívico que trabaja en favor de la dictadura.



PERIODISTAS EN PARO



Una participación masiva en todo el país tuvo el paro de actividades de cinco minutos a que convocó a sus afiliados el Colegio de Periodistas de Chile, el martes 12 de abril, a las 11,30 horas.

Los profesionales de la prensa desde Arica a Magallanes, incluyendo a quienes se desempeñan en los medios de la prensa oficialista, como El Mercurio y la Tercera, e incluso en el gobiernista diario La Nación, paralizaron sus labores, dejaron sus libretas de apuntes, apagaron cámaras y grabadoras, en adhesión a la convocatoria, efectuada en demanda de una genuina libertad de expresión y en protesta por la sistemática persecución y acoso que el régimen lleva a cabo en contra de los profesionales de la prensa, existiendo a la fecha 27 periodistas condenados o procesados por la justicia militar, y numerosos otros que se encuentran amenazados de muerte por grupos como el ACHA, por el sólo hecho de cumplir sus labores profesionales y de ese modo, el rol que les corresponde como comunicadores sociales.

LA RESPONSABILIDAD DE PINOCHET

“Las autoridades no pueden eludir la responsabilidad que les cabe en estas situaciones”, señaló en una de sus partes la declaración oficial del Colegio de Periodistas respecto del paro. Y ello resulta obvio, pues la totalidad de los procesos judiciales que afectan a profesionales de la prensa se han originado en supuestas “ofensas” o “injurias” contra las fuerzas armadas, o contra el propio Pinochet. La dictadura, que se ha dado el trabajo de requisar ediciones enteras de alguna publicación por algún artículo que no le agrada, responde así, con represión y amenazas, a los esfuerzos de los periodistas chilenos por informar

verazmente de la realidad nacional. No es aventurado, además presumir que tras las amenazas de muerte y las agresiones de hecho está la misma voluntad que arrastra a los periodistas a los tribunales militares.

LOS PROCESADOS

Los siguientes son los periodistas procesados o condenados: Marcelo Contreras, director de la revista APSI; Francisco Herreros, director de la revista CAUCE; Abraham Santibañez, director de revista HOY; Juan Pablo Cárdenas, director de revista ANALISIS; Sergio Marras, director adjunto de APSI; Patricia Verdugo, colaboradora de APSI y otros medios independientes, además de autora de libros sobre el asesinato del padre André Jarlan, los jóvenes quemados y otros; Felipe Pozo, ex director de Fortín Mapocho; Gilberto Palacios, periodista de Fortín Mapocho, Alberto Gamboa, editor de Fortín Mapocho, Monica González, colaboradora de Análisis; Alejandro Guillier, redactor político de HOY; Ariel Poblete, ex editor de CAUCE; Víctor Vaccaro, director adjunto de CAUCE; Gonzalo Figueroa, del directorio de CAUCE; Ismael Llona, de CAUCE; Marcelo Mendoza, de CAUCE; Eugenio González, jefe de informaciones de radio Nuevo Mundo; Edwin Harrington, ex director de revista CAUCE; Manuel Salazar, redactor político del diario La EPOCA; Emilio Philippi, Director de la EPOCA; Jorge Donoso; Patricio Acevedo; Pablo Cruz Nocetti y Manuel Suárez, los dos últimos del diario La Prensa Austral de Punta Arenas.

Respecto de las amenazas de muerte y agresiones, los últimos casos fueron el secuestro y torturas a una colaboradora de la revista Cauce, y las amenazas contra las profesionales Pamela Jiles y Alicia Oliva, de la revista Análisis.

Codepu: denuncia internacional de amedrentamientos

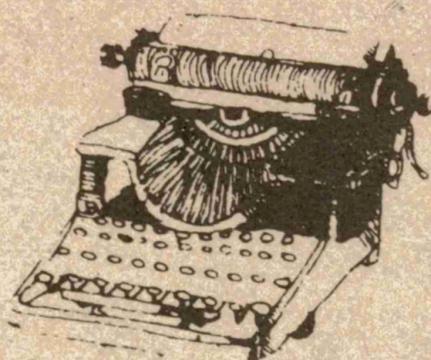
Gran cantidad de cartas, llamados al gobierno y miembros de la justicia para que asuman su responsabilidad y adopten medidas urgentes, ha sido el resultado inmediato de la campaña de denuncia internacional iniciada por Codepu sobre la situación que afecta a personas y organizaciones que han sido víctima de amenazas, amedrentamientos y secuestros en el último tiempo. Un rol protagónico en la recepción de denuncias y agitación de ellas, en Europa, ha tenido el movimiento ecuménico Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura.

Entre estas personas amenazadas se encuentran el Cardenal Raúl Silva Henríquez, el obispo Carlos González, el padre Wilfredo Van Peere, director de la radio La Voz de la Costa de Osorno, la actriz Lorena Nazal, la presidenta del Colegio de Enfermeras, Patricia Talloni, Octavio Burotto y Julio Araya, dirigentes de la Juventud Demócrata Cristiana, Osvaldo Muñoz, de Serpaj, las periodistas de revistas Análisis, Alivia Oliva y Pamela Jiles, entre otros.

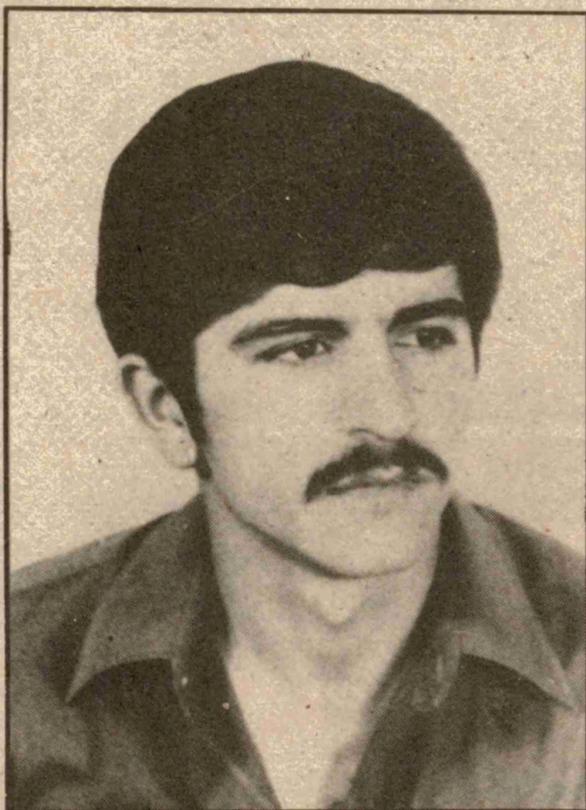


Sospechoso de ser del pueblo

El 13 de abril dos dirigentes sociales, Floriano Cariqueo, presidente de Ad Mapu metropolitano, y Blanca Carrasco, integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fueron detenidos por carabineros frente a los tribunales de justicia por su actitud "sospechosa". Según los dos afectados, su única actitud "sospechosa" fue caminar por el centro con bolsas en vez de maletines y no ser rubios. Ambos dirigentes fueron llevados a la comisaría: después de varios chequeos de antecedentes y revisiones de libros y papeles, Blanca Carrasco, esposa de Sergio Ruiz, desaparecido desde 1984, fue expuesta a un interrogatorio agresivo e irónico por parte de carabi-



neros, quienes se burlaron de la desaparición de su compañero e indicaron que el hecho de vivir en la población el Pinar ya la marcaba como "sospechosa". Después de 5 horas, los dos sospechosos fueron dejados en libertad. Estos sucesos no son nada de novedosos en sí mismos, ni para los medios de comunicación de la oposición. ¿No es el momento de preguntarnos hasta qué punto el racismo y clasismo de esta sociedad nos ha invadido haciendonos aceptar que ser del pueblo es ser sospechoso?"



Asesinos de Carlos Godoy E. deben pagar

La Corte Marcial subió a 4 millones de pesos la indemnización que los Carabineros que mataron a Carlos Godoy Echevoyen deben pagar a la familia de su víctima. Originalmente, el fiscal militar de Valparaíso había

fijado en 2 millones el monto de esta indemnización.

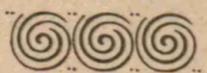
Carlos Godoy Echevoyen fue asesinado a golpes en la subcomisaría de Quintero el 22 de febrero de 1985 luego de ser detenido junto a otros jóvenes por personal de la ahora disuelta Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR, cuyos integrantes están involucrados en numerosos asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, secuestros y otros crímenes.

Curiosamente, la Corte Marcial liberó del pago de la indemnización al ex coronel Luis Fontaine, que era el jefe de la DICOMCAR y que está procesado y encarado como cómplice en el asesinato de Carlos Godoy. En consecuencia, los cuatro millones de pesos tienen que pagarlos el capitán Héctor Díaz Anderson y el sargento Víctor Navarro, que son reos como autores materiales del asesinato, y los suboficiales Julio Hurtado y René Carmona, procesados como cómplices.



Primera Marcha nacional de los Derechos Humanos

Convocada por 43 organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, se realizará el 31 de mayo la primera "marcha por los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de todos los chilenos". En esta acción, con que culminará la Octava Semana Internacional por los Detenidos Desaparecidos, que se llevará a cabo entre el 23 y el 31 de mayo, también se pedirá el pleno esclarecimiento y justicia de todos los delitos contra los derechos humanos acaecidos en Chile durante estos 15 años de dictadura, por los 5 jóvenes desaparecidos en septiembre pasado, en apoyo de todas las reivindicaciones y justas exigencias de los trabajadores, pobladores y estudiantes, y por la participación ciudadana de todos y cada uno de los aspectos de la vida nacional. Y convocará, además, a respaldar los reiterados acuerdos de las Naciones Unidas de exigir a Pinochet el efectivo respeto a los derechos humanos.





El primero de mayo es para los trabajadores y sus organizaciones un día de conmemoración y homenaje a las conquistas logradas en un siglo de lucha en pro de sus derechos. Pero, principalmente, es una fecha de renovación del compromiso de seguir esforzándose por reivindicaciones no cumplidas. En ese sentido, el proletariado chileno tiene muchas tareas pendientes, luego que la dictadura se fijó como una de sus principales tareas la destrucción del movimiento sindical. Reconstituir la fuerza organizada de los trabajadores no es fácil, pero tampoco imposible. La principal tarea pendiente es la construcción de una Central Unitaria de Trabajadores, que se convierta en una instancia aglutinadora y poderosa, capaz de llevar a los trabajadores chilenos a enfrentar como un todo la reconquista de la democracia y de sus derechos conculcados.